**CENTRO PARA LA ACCION LEGAL
EN DERECHOS HUMANOS
-CALDH-**

**ALEGATOS FINALES, FONDO, REPARACIONES Y COSTAS
ANTE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS
HUMANOS**

MARIA TIU TOJIN Y JOSEFA TIU TOJIN

CASO 10.686 Vrs. GUATEMALA

Junio, 2008

Asesora Legal, Angélica González

Director Ejecutivo, Mario Minera

HONORABLE CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Angélica González, Asesora Legal y Mario Minera, Director Ejecutivo del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (en adelante –CALDH-) en su calidad de representantes de las víctimas y sus familiares del caso María y Josefa Tíu Tojín Vrs. Guatemala, somete a consideración de la Honorable Corte Interamericana (en Adelante “La Honorable Corte” o “La Corte”), los alegatos finales de Fondo, reparación y costas.

Previo a entrar en materia, es importante señalar que los procesos ante el Sistema Interamericano y en especial las sentencias emitidas por la Corte Interamericana, son grandes aportes en los procesos de verdad y justicia.

Tal y como la Corte lo ha establecido, la sentencia *per se* es una medida de reparación, sin embargo, la oportunidad de ser escuchados, de poder contar lo que sucedió sin ser acusados de comunistas resentidos, la oportunidad de hablar cuando muchas veces el temor les ha hecho callar, aporta un sentido reparador a las víctimas, más aún a aquellos que tienen la oportunidad de presentar directamente su testimonio, con un significativo valor cuando las víctimas pertenecen a pueblos indígenas a quienes se les ha denegado constantemente el acceso a al justicia

Las sentencias emitidas por la Corte, crean oportunidades y posibilidades, la jurisprudencia emitida en cada una de sus sentencias, permite añadir nuevos elementos a los procesos de justicia, y crea las condiciones para que otras personas que han sido víctimas de graves violaciones a los derechos humanos pierdan el temor de hablar sobre las graves violaciones a las cuales han sido sometidas o bien de hechos que hayan conocido en relación a otras víctimas, estableciendo bases sólidas en los procesos de verdad e impulso de la justicia.

ANTECEDENTES

El 30 de abril del año 2008, se llevó a cabo la Audiencia Pública ante la Honorable Corte, en la cual se presentaron y discutieron los hechos controvertidos en el caso de María y Josefa Tíu Tojín Vrs. Guatemala. Para el efecto, Victoriana Tíu Tojín, hermana y tía de las víctimas respectivamente y víctima en sí misma en el presente caso presentó su declaración, quien se manifestó en cuanto a la desaparición de su hermana y sobrina, la denegación de justicia posterior y los efectos y consecuencias de estas desapariciones a su familia.

En esta audiencia se contó con la participación de la Perito Helen Mack, quien relató a los presentes, el impacto a nivel nacional y la importancia de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de su hermana Myrna Mack, basando su peritaje en aspectos relacionados a la Denegación de Justicia en Guatemala, dificultades judiciales, la falta de certeza jurídica, así como los obstáculos de Acceso a la Justicia por parte de la población indígena.

Previamente, se había hecho llegar la Honorable Corte, el peritaje presentado ante Fedatario Público (affidávit) por Javier Gurriarán, perito experto quien presentó información relevante de la situación de la población que conformara las Comunidades de Población en Resistencia de la Sierra, de la cual formaba parte al momento de ser detenidas ilegalmente María y Josefa Tíu, dicho peritaje presentó información relacionada las condiciones de vida de la población desplazada, su sobrevivencia incluyendo además información sobre las víctimas de la cual el perito tuvo conocimiento como parte del proceso de recuperación de la memoria de la CPR-Sierra. Todos estos aspectos serán retomados más adelante con el objeto de ir estableciendo los hechos que fueron establecidos.

DEL RECONOCIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO.

Es importante, previo a realizar las consideraciones finales pertinentes a este caso, que el Estado de Guatemala reconoció su responsabilidad internacional por la violación de los derechos humanos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos alegados por los peticionarios a saber: Derecho a la vida (artículo 4), Derecho a la Integridad personal (artículo 5), Derecho a la Libertad Personal (artículo 7), Garantías Judiciales y Protección Judicial (artículos 8 y 25) en perjuicio de María; Así mismo Derecho a la Vida (artículo 4), Derecho a la integridad personal (artículo 5), Derecho a la Libertad Personal (artículo 7), Garantías judiciales y Protección Judicial (artículos 8 y 25), Derechos del Niño (artículo 19) en perjuicio de Josefa Tíu y los artículos 5 (Derecho a la Integridad Personal) 8 (Garantías judiciales) y 25 (Protección Judicial) en perjuicio de los familiares en relación al artículo 1.1 (obligación de respetar los derechos) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconociendo también su responsabilidad por el Artículo I de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

Se valora por parte de los peticionarios, dicho reconocimiento y se solicita a la Honorable Corte que el mismo se tome en consideración al momento de dictar una sentencia, con las consecuencias jurídicas que dicho reconocimiento ameriten.

DE LAS VIOLACIONES.

Dado el reconocimiento del Estado en cuanto a su responsabilidad por la violación de los derechos fundamentales establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos, como en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, iniciamos estos argumentos contextualizando como estas violaciones fueron cometidas en contra de María y Josefa, así como en contra de la familia de ambas.

Violación al Artículo I de la Convención Interamericana

Sobre Desaparición Forzada de Personas:

La legislación interna guatemalteca establece en el artículo 201 TER del Código Penal¹ que:

“comete el delito de desaparición forzada quien, por orden, con la autorización o apoyo de autoridades del estado, privare en cualquier forma de la libertad a una o más personas, por motivos políticos, ocultando su paradero, negándose a revelar su destino o reconocer su detención, así como el funcionario o empleado público, pertenezca o no a los cuerpos de seguridad del Estado, que ordene, autorice, apoye o de la aquiescencia para tales acciones.

Constituye delito de desaparición forzada, la privación de la libertad de una o más personas, aunque no medie móvil político, cuando se cometa por elementos de los cuerpos de seguridad del Estado, estando en ejercicio de su cargo, cuando actúen arbitrariamente o con abuso o exceso de fuerza. Igualmente, cometen delito de desaparición forzada, los miembros o integrantes de grupos o bandas organizadas con fines terroristas, insurgentes, subversivos o con cualquier otro fin delictivo, cuando cometan plagio o secuestro, participando como miembros o colaboradores de dichos grupos o bandas.

El delito se considera permanente en tanto no se libere a la víctima.

---

¹ Decreto No 33-96 del Congreso de la república de Guatemala

El reo de desaparición forzada será sancionado con prisión de veinticinco a cuarenta años. Se impondrá la pena de muerte en lugar del máximo de prisión, cuando con motivo u ocasión de la desaparición forzada, la víctima resultare con lesiones graves o gravísimas, trauma psíquico o psicológico permanente o falleciere.

La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, adoptada el 9 de junio de 1994, establece en su artículo II que:

“(. .) se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con la cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”

Las obligaciones internacionales generadas para los Estados partes de la Convención Interamericana de Desaparición Forzada de Personas, en virtud de este artículo son las de:

b. Sancionar en el ámbito de su jurisdicción a los autores, cómplices y encubridores del delito de desaparición forzada de personas, así como la tentativa de la comisión del mismo; (. .)

d. tomar las medidas de carácter legislativo, administrativo, judicial o de cualquier otra índole necesarios para cumplir con los compromisos asumidos en la presente Convención.

Así mismo, la Corte Interamericana se ha referido en su jurisprudencia sobre las desapariciones forzadas e involuntarias, señalando que: *“constituye una de las más graves y crueles violaciones a los derechos humanos, pues no sólo produce una privación arbitraria de la libertad sino que pone en peligro la integridad personal, la seguridad y la propia vida del detenido. Además la coloca en un estado de completa indefensión, acarreando otros delitos conexos. De ahí la importancia de que el estado tome todas las medidas necesarias para evitar dichos hechos, los investigue y sancione a los responsables y además informe a los familiares el paradero del desaparecido y los indemnice en su caso.”²*

² Sentencia del 24 de enero de 1998, Caso Blake Vrs Guatemala Corte Interamericana de Derechos Humanos, párrafo 66

Naciones Unidas, ha establecido además, que la desaparición forzada debe ser considerada **delito permanente** mientras sus autores continúen ocultando la suerte y el paradero de la persona desaparecida y mientras no se hayan esclarecido los hechos.³

Todos y cada uno de estos aspectos son relevantes en el presente caso, Victoriana expuso que a partir del conocimiento de la detención de María y de la existencia de Josefa, se llevaron a cabo todas las medidas posibles para su ubicación y liberación, sin embargo, desde el inicio fue negada toda información sobre ambas por parte de sus captores.

Ninguno de los esfuerzos realizados por la familia tuvo éxito, Victoriana expuso a los presentes que como parte de su búsqueda, logró reunirse con el Presidente de la República, quien le comentó *“que no enviaría su seguridad personal pero agotaría las posibilidades y enviaría personal a investigar los hechos contra su hermana”* pero esto nunca sucedió, negándole por completo la posibilidad de resguardar la integridad de ambas víctimas así como la posibilidad de asegurar que se respetaran sus derechos fundamentales y que María tuviese acceso a las garantías judiciales mínimas, sin dejar de lado, que se negara la posibilidad de que Josefa fuera resguardada que cualquier daño dada su condición de niña y su estado de indefensión.

Aún después de la firma de la Paz, y que se ha reiterado desde diferentes ámbitos la necesidad de investigar, juzgar y sancionar a los responsables, de quienes además de que se haga justicia, la familia espera poder finalmente conocer el paradero de María y Josefa para cerrar el círculo de dolor generado por la desaparición, aún con todo el tiempo transcurrido, se les sigue negando esta posibilidad.

Violación al Derecho a la Vida Artículo 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos:

Toda persona tiene derecho a que se respete su vida Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente

Como se expone, cuando una persona es privada de su libertad de esta forma arbitraria, se pone en peligro la integridad personal, la seguridad y la vida del detenido. A este respecto, pese a las esperanzas de la familia de encontrar a ambas con vida, han

---

³ Declaración de Naciones Unidas sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (1992), artículo 17(1)

manifestado que dado las condiciones de desaparición de ambas, así como de sus captores y la situación del país en ese momento, es poco probable de que se encuentren con vida.

La Corte ha establecido que la práctica de desapariciones ha implicado con frecuencia la ejecución de los detenidos, en secreto y sin fórmula en juicio, seguida del ocultamiento del cadáver con el objeto de borrar toda huella material del crimen y de procurar la impunidad absoluta, lo que significa una brutal violación del derecho a la vida, reconocido en el artículo 4 de la Convención⁴.

Es importante llamar la atención nuevamente en cuanto a la política genocida, dentro de la cual se desarrollan estos hechos, y dentro de la cual se llevaban a cabo desapariciones forzadas y ejecuciones de personas, en especial de aquellos que eran considerados base social de la guerrilla, identificados como tal la población civil, en particular, de lo cual no eran ajenas las Comunidades de Población en Resistencia⁵ y a este hecho sumarle la participación que había tenido María en una de las agrupaciones guerrilleras, las probabilidades de que se respetara su integridad física y su vida son nulas aún más si se considera que ella ya había logrado escapar a su primera detención durante 1980 y las condiciones y torturas bajo las cuales permanecía retenida. Estas políticas han sido plenamente conocidas por la Honorable corte en casos previos como el Caso Blake 1998, y el Caso Molina Theissen, 2004. Maritza Urrutia, 2003 y Plan de Sánchez 2004.

En relación a Josefa, dado su edad, además de la presunción de su muerte, también existe la posibilidad de que haya sido entregada a terceros, o bien que alguno de sus captores la haya retenido ilegalmente.⁶ Josefa pudo haber sido ejecutada como una medida coercitiva y forma de tortura a María, o por no serles de utilidad en sus propósitos o bien porque la eliminación de niños dentro del conflicto armado interno también constituyó una de las políticas de represión dentro del conflicto armado interno.⁷ El anexo C de los alegatos presentados el 30 de diciembre de 2007, contiene un artículo denominado "La Misión sin

⁴ Sentencia de fecha 22 de noviembre de 2005, párrafo 103, Caso Gómez Palomino, Corte Interamericana de Derechos Humanos

⁵ En el Anexo "A" del documento de argumentos, solicitudes y pruebas transmitido a la Honorable Corte, de fecha 30 de diciembre de 2007, Resumen del Manual de Guerra Contrasubversiva del Ejército de Guatemala Marzo 1978 se encuentra el concepto de Enemigo Interno: "individuos, grupos u organizaciones que tratan de romper el orden establecido, siguiendo consignas del comunismo internacional, mediante la llamada "Guerra revolucionaria" los no comunistas que también tratan de romper el orden interno, son igualmente enemigos"

⁶ ( ) se sabe que algunos niños fueron entregados a familias adoptantes, [las otras] víctimas fueron conducidas al destacamento militar de Chupol, Chichicastenango" Testimonio dado a la CEH, Capítulo II, Las Violaciones a los Derechos Humanos y los Hechos de Violencia Párrafo 2164

⁷ " ( ) la violencia fue particularmente cruel en contra de mujeres, niños y ancianos CEH, Capítulo II, Violaciones a los Derechos Humanos Párrafo 748

Piedad del Ejército de Ríos Montt: Los fusiles de Guatemala, escrito por el periodista Allan Nairn, especialista en asuntos centroamericanos, quien pasó cuatro meses en compañía del ejército guatemalteco durante 1982, en su entrevista (ver página 75 de los alegatos) en la entrevista de uno de los sargentos se observa claramente los procedimientos en cuanto a las personas que se refugiaban en las montañas: *“Qué hacen las tropas cuando encontraban a los refugiados. A veces no los encontramos. Los vemos pero se escapan. Pero cuando los encuentran qué hacen? Los matamos pues. Son pocas las personas o son aldeas enteras? No, son aldeas entera. Cuando entramos a las aldeas matamos algunos y el resto se escapó. Bajo la táctica del ejército, un campesino encontrado fuera de los pueblos controlados por el ejército está en peligro mortal. Nosotros conocemos a los pobres de cerca y de lejos, (...) Si vemos a alguien caminando en las montañas, eso quiere decir que es un subversivo. Entonces tratamos de agarrarlo para saber a dónde va. Lo arrestamos. Y entonces vemos si es guerrillero o no. Pero los que caminan en la montaña sabemos que son guerrilleros. Tal vez algunos son niños, pero nosotros sabemos que son delincuentes subversivos (.)”*

“Por que fueron seleccionados? El que las víctimas sean generalmente desconocidas en el pleno de la sociedad significa una reacción más apagada tanto localmente como en el extranjero; ello hace la pregunta por que? Más difícil de responder. (...) Aunque las víctimas no son figuras de amplio renombre, son bien conocidas dentro de los pequeños grupos que componen la izquierda, el totalmente inesperado ataque en contra de uno de sus miembros causa una oleada de terror” - Anexo D argumentos del 30 de diciembre de 2006, documento desclasificado.

Violación al Derecho a la Integridad Personal, Artículo 5 (1) y (2) de la Convención:

1. *Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.*
2. *Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.*

Victoriana pudo exponer en su declaración, las condiciones físicas que presentaba María al regresar de su primera detención. Los peticionarios consideran que se violó la integridad física, psíquica y moral de María y Josefa, debido a las mismas condiciones en que se llevó a cabo la detención ilegal de ambas, pero además la primera detención de María en la cual fue expuesta a tortura constante con shocks eléctricos, la violación sexual a la que fue sometida, el saber que su padre también era objeto de tortura, hechos que sucedieron cuando apenas ella tenía apenas 17, esta es una base para partir de lo que pudo haberle

sucedido a María y a Josefa en esta nueva detención. Debe considerarse además el contexto ya establecido, del momento de su captura.

La experiencia ya conocida personalmente por María, y con la preocupación de proteger a su hija recién nacida, probablemente generó un estado de angustia, temor e incertidumbre en cuanto a lo que podría sucederle a ambas. Otro de los factores es que María ya no había tenido contacto con su familia, por lo que el temor sería mucho más grande al no tener certeza de que habría alguien quien buscaría por ella y su hija de quien su familia no tenía conocimiento.

En cuanto a la situación de Josefa, puede deducirse que el temor experimentado por María, se trasladaba y afectaba directamente a su hija, quedan las interrogantes sobre si en algún momento la niña también fue víctima de tortura con el objeto de que María diera respuestas a sus captores, quien la cuidaba, cambiaba y alimentaba, son preguntas que quedan sin respuestas mientras que los responsables no sean interrogados.

“la tortura afectó principalmente a hombres adultos. Sin embargo, los porcentajes de niños y mujeres afectados por esta violación siguen siendo significativos”⁸

Al respecto, es importante retomar que a la familia de María y Josefa también se les violó este derecho de conformidad con lo que ha establecido la Corte previamente en cuanto a que las personas más cercanas a la víctima, considerándolas a su vez como víctimas en los casos en los casos en que se violan los derechos fundamentales tales como la vida y la integridad personal. La familia estaba enterada de los sucesos ocurridos en 1980, el enterarse nuevamente de que María estaba en poder nuevamente de sus captores y ahora con una niña recién nacida, creo un estado de impotencia y preocupación que también impulsó en ese momento la despreocupación de su propia seguridad e impulsar la búsqueda inmediata por su recuperación.

Victoriana Tíu Tojín o Victoria Tíu Tojín, hermana mayor y tía de las víctimas, es a quien la familia delegó la responsabilidad de búsqueda de María y Josefa, ya había sido amenazada por Comisionados Militares, amenazas que fueron denunciadas en su debido momento sin que las autoridades correspondientes llevaran a cabo una investigación seria de tales hechos.

---

⁸ CEH, Capítulo II, Las violaciones a los derechos humanos y los hechos de violencia, párrafo 2336

La búsqueda determinada de Victoriana por María y Josefa fue respaldada por el resto de su familia, tanto de su madre Josefa Tojín como de sus hermanos y hermanas, quienes se vieron en la necesidad de asumir las responsabilidades de Victoriana dentro de la economía familiar como en el cuidado de sus hijos.

El sufrimiento generado por la desaparición forzada de María y Josefa y las constantes negativas en dar información relacionada a su paradero, generó un gran sufrimiento, angustia y desesperación en la familia, sobre todo porque era el segundo miembro de su familia al cual perdían en manos de agentes del Estado, el primero había sido el esposo de doña Josefa Tojín y padre de María. En el caso de Victoriana, su esposo también fue capturado por Agentes del Estado, y nunca más volvió a saber de él, lo mismo había sucedido al Esposo de Rosa.

Violación al Derecho a la Libertad Personal, Artículo 7 de la Convención:

- 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y la seguridad personales.*
- 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.*
- 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.*
- 4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella.*
- 5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio.*
- 6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal*

competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona.

Los numerales 2 y 3 establecen límites al poder público que prohíben expresamente tanto las detenciones ilegales como las arbitrarias, la Corte ha establecido al respecto:

“Según el primero de tales supuestos normativos, nadie puede verse privado de la libertad sino por las causas, casos o circunstancias expresamente tipificadas en la ley (aspecto material), pero, además, con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos en la misma (aspecto formal). En el segundo supuesto, se está en presencia de una condición según la cual nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento por causas y métodos que –aún calificados de legales– puedan reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del individuo por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles o faltos de proporcionalidad”⁹

Se ha establecido por las declaraciones de Victoriana, el contenido del Peritaje de Javier Gurriarán y con la documentación que forma parte del acervo probatorio, que María y Josefa fueron detenidas en un grupo de 86 personas, todos civiles, desarmados, desplazados internos que huyeron de sus comunidades para salvaguardar su vida de las políticas contrainsurgentes aplicadas por el Estado. Bajo estas circunstancias, la detención se llevó a cabo por elementos militares.

Los 86 detenidos, incluyendo María y Josefa, fueron acusados de ser guerrilleros, y estas fueron las bases para su detención, la quema de sus víveres y de los lugares de resguardo de ese momento, a pesar de que ninguno portaba armas y ninguno estaba siendo acusado de cometer algún delito flagrante en ese momento que justificara su detención.

Ninguno de los detenidos fue puesto de inmediato bajo la tutela de un juez que pudiera establecer que hubieran habido incurrido en actos delictuosos o bien dictara su liberación. Por el contrario todos fueron interrogados por sus captores, retenidas bajo la custodia de elementos militares, en destacamentos y zonas militares, contraviniendo la Constitución Política de la República de Guatemala que establece que toda persona detenida “debe ser conducida a lugares de detención, arresto o prisión diferentes al los que están legal y públicamente destinados al efecto”¹⁰.

---

⁹ Sentencia del 7 de junio de 2003, Caso Juan Humberto Sánchez, párrafo 78

¹⁰ Artículo 10, Constitución Política de la República de Guatemala

El informe presentado por Oscar Cifuentes, Auxiliar Departamental de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Santa Cruz del Quiché, el Quiché de la Procuraduría de Derechos Humanos, en su nota enviada al Licenciado Jorge Roche, Coordinador de Auxiliares Departamentales de la Procuraduría de Derechos Humanos, de fecha 15 de abril de 1991¹¹, establece que el grupo de 86 personas estaba compuesto (con algunas variantes entre ambas) por 28 mujeres 22 niños y 29 y 7 hombres. Siendo los menores trasladados y retenidos bajo la tutela de militar, contraviniendo de esta forma la legislación guatemalteca y los tratados y convenios internacionales en materia de protección de los derechos de los niños.

Los familiares de María y Josefa, en ningún momento fueron notificados legalmente de la detención de ambas, asegurando de esta forma que se tuviera acceso a las debidas garantías procesales en relación a la detención de ambas víctimas, por el contrario se ha negado en todo momento el conocimiento del paradero de ambas.

No existe evidencia alguna, de que María y Josefa, posteriormente a ser separadas del grupo hayan sido puestas a disposición de algún Juez para la deducción de responsabilidades,

*"Hubo bombardeos, ametrallamientos y grandes enfrentamientos con la guerrilla". Según el testimonio de un ex soldado, "los oficiales decían que las CPR son puros guerrilleros, pero guerrilleros que tienen mujeres e hijos, y les chingan esos guerrilleros. Decían que hay que buscar las CPR y matar a todos, también a las mujeres y los niños" Las últimas grandes ofensivas contra las CPR se produjeron a finales de 1991 y entre finales de 1992 y febrero de 1993"*¹².

Ninguno de los medios utilizados para recuperar a Josefa y María fue efectivo, las denuncias ante la Procuraduría de Derechos Humanos, ante el Juez de Paz, las Exhibiciones Personales planteadas por Victoriana, CERJ, Exhibiciones Personales planteados por abogados internaciones, denuncias públicas a través de medios de comunicación, ni las acciones urgentes lograron que las autoridades dieran razón de las víctimas, agravando de esta forma, las violaciones cometidas en contra de ambas.

---

¹¹ Anexo 6, folio 11 Demanda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la Corte IDH Caso 10 868 María Iju Tojín y Josefa Iju Tojín Vrs Guatemala

¹² CEH, Capítulo II, La Violación a los Derechos Humanos y los Hechos de Violencia, VII La Estrategia de las organizaciones guerrilleras, párrafo 1597 Tercer Párrafo

Estos entre otros, son los indicadores que demuestran que el Estado permaneció inactivo ante todas las acciones utilizadas para proteger y garantizar la Libertad Personal de ambas víctimas.

Violación a los Derechos a las Garantías Judiciales y a la Protección Judicial; artículo 8 (1) y 25 de la Convención.

8. 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

25.1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

A su vez, el artículo 1(1) de la Convención Americana establece:

1. Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

El Estado está obligado a garantizar el acceso a la justicia, debidas garantías de legalidad, independencia e imparcialidad, sin embargo, puede observarse que ninguna de estas garantías fueron respetadas por el Estado.

Estos artículos determinan no solo el derecho de las víctimas que como ya hemos visto fue negado en todo momento, sino además se negó la posibilidad de la familia de acceso a la justicia por más de 18 meses.

Esta negativa ha prevalecido a pesar de lo establecido en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, en cuanto a la obligación del Estado a sancionar a autores, cómplices y encubridores del delito de desaparición forzada así como la obligación de

tomar las medidas necesarias de toda índole para cumplir con sus compromisos en cuanto a esta Convención.

A pesar de la constante denuncia, de se lograron avances en materia de justicia. La oportunidad de determinar las responsabilidades y de ubicar a las víctimas recayó sobre la Auditoría de Guerra, quienes en procedimiento Especial de Averiguación No. 2047-90 se investigó el "plagio o secuestro" de María y Josefa Tíu, en ese momento el sindicato fue el Teniente de Reservas en el Arma de Infantería William Alexander West Quinteros, quien fue puesto en libertad presuntamente por no haber motivos suficientes para dictar el autor de prisión correspondiente.

Evidentemente era difícil lograr resultados de la investigación, cuando misma era competencia de en un órgano eminentemente implicado en los hechos violatorios, lo que puede y debe ser considerado como una clara obstrucción de agentes del Estado en cuanto al esclarecimiento de la verdad.

Auditoría Militar omitió el establecer el nombre de la persona responsable de la elaboración del listado entregado a CEAR en el cual figuraba el nombre de María y Josefa. Puede observarse en el expediente respectivo, que las indagatorias realizadas se limitaron a preguntar si conocían o no a María Tíu Tojín y a su hija, ante la respuesta negativa, se daba por terminada la declaración de estas personas¹³.

Los daños psicológicos y morales, han ido perneando a la familia de las víctimas, pues la falta de investigación, juicio y sanción de los responsables, no es un hecho que vean cercano, y por lo tanto temen no llegar a conocer lo sucedido a ambas víctimas, respuestas a las preguntas de dónde están? Quienes son los responsables? En donde visitarlas o llevarles flores? causan en ellos una interminable espera por escuchar en algún momento que María y Josefa están con vida, por lo que el tormento de cada golpe en la puerta, de cada visita inesperada, ilusiona y daña cotidianamente la situación física y psicológica de la familia, en especial de la madre y abuela de las víctimas.

Este caso, no puede ni debe ser conocido por el fuero militar, en principio porque la normativa legal interna ha derogado ese fuero militar, por lo que se estaría violentando los principios de independencia judicial y de autonomía, permitiendo de esta forma, mantener este hecho en la completa impunidad.

---

¹³ -Ver anexo 5 de la Demanda de la Comisión Interamericana

El Estado de Guatemala debe asumir en materia de justicia, verdad y reparación a nivel nacional, la obligación de garantía de que únicamente los órganos legalmente establecidos, responsables de administrar justicia, llevarán a cabo la investigación, juicio y sanción de los responsables de los hechos de graves violaciones a los derechos humanos, sin interferencia o injerencia de agentes del Estado que se encuentran involucrados directamente en los hechos violatorios.

Violación a los derechos del Niño artículo 19 de la Convención:

Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.

Este caso es solo una muestra de los miles de niños que fueron víctimas en el conflicto armado interno. No es el único documentado y sin embargo a pesar de los miles de casos que ya se han dado a conocer, el Estado no ha realizado acciones concretas para impulsar la búsqueda de estas personas desaparecidas ni la dignificación de los mismos.

La niñez guatemalteca, no solamente padeció de las desapariciones, sufrió la orfandad, como lo expresa Javier Gurriarán en su peritaje, cientos de niños ocultos en las montañas se vieron albergados por otras familias o bien se vieron forzados a resguardarse por sí mismos y buscar su propia sobrevivencia.

Niñas fueron violadas constantemente como parte de la violencia estatal, se arrasaba con el cultivo, con las casas, con la comida, se arrasaba contra la dignidad humana y contra la misma cultura, dañando a las mujeres.

Se eliminaron niños bajo la consigna de que "*eran comunistas*", algunos niños no pudieron nacer, se forzaron otros a patrullar y tomar las armas y dañar a su propio hermano; se obligo a prestar servicio militar y cometer acciones violentas en contra de sus propias familias.

Todos estos hechos, están documentados como parte del Informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, en el informe del Proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica de la Oficina del Arzobispado, en libros escritos por niños que esclavos de quienes los dejaron en la orfandad y el Estado, sigue esperando.

No se aseguró que Josefa fuera entregada a algún familiar que pudiera cuidar de ella, como una obligación primordial que asegurara su protección y cuidado y en el acto de desaparición mismo.

*"(...) todos los menores fueron muertos con golpes de una almádana en la cabeza, a los muy pequeños los estrellaban en los muros o palos sujetándolos de los pies y posteriormente eran arrojados a ese pozo ... después se siguió con los hombres, mujeres y ancianos ... y al igual que a los niños, les pegaban en el cráneo y los lanzaban al pozo ... todos los menores fueron muertos con golpes de una almádana en la cabeza, a los muy pequeños los estrellaban en los muros o palos sujetándolos de los pies y posteriormente eran arrojados a ese pozo ... después se siguió con los hombres, mujeres y ancianos ... y al igual que a los niños, les pegaban en el cráneo y los lanzaban al pozo ..."*¹⁴

El estado de vulnerabilidad de Josefa Tíu es indudable, ya que la niña contaba con apenas poco más de un mes de nacida, lo que no le permitía valerse o defenderse por sí misma. Como lo hemos establecido anteriormente, no se conoce con certeza lo sucedido con Josefa, no se descarta la posibilidad de que haya sido asesinada, sin embargo, también pudiera haber sido entregada a terceros o bien permanecido con sus captores, violando así su derecho a ser protegida por su propia familia.

Además de las violaciones propias cometidas por agentes del estado, responsables directos de su captura, también debe considerarse la falta de actuación inmediata de los órganos responsables de administrar justicia, en cuanto a llevar a cabo todas las acciones posibles y necesarias que pudieran asegurar y garantizar una adecuada protección a Josefa a través de su búsqueda y recuperación inmediata.

Incumplimiento de la Obligación general de Respetar y garantizar los Derechos Humanos.

El artículo 1.1 de la Convención establece:

Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social

---

¹⁴ Capítulo II, Las violaciones a los Derechos Humanos, párrafo 901. Relato masacre Las Dos Erres, Peten, 1982.

Este artículo establece las obligaciones fundamentales de respeto y de garantía de los Estados partes, razón por la cual, todas aquellas acciones u omisiones de cualquier autoridad pública se convierte en un hecho imputable al Estado que compromete su responsabilidad internacional en los términos previstos en la misma Convención de tal forma que debe asumir todas aquellas acciones que aseguren el pleno goce de los derechos y libertades que se encuentran reconocidos en ésta.

Desde el momento en que el Estado tuvo conocimiento de la detención ilegal en contra de María y Josefa tenía la obligación de llevar a cabo todas las acciones necesarias, legales, administrativas, judiciales y normativas para evitar que otras violaciones a sus derechos fueran perpetrados en su contra, tenían los medios para lograrlo pues eran los mismos miembros del Estado sus captores, existía un listado con sus nombres y con una firma en ella, porque se denunció a tiempo.

Tampoco se han impulsado acciones reales hasta este momento, para lograr identificar plenamente a los responsables de este tipo de hechos. El no accionar permite que este tipo de hechos permanezcan en la impunidad, crea las condiciones para que vuelva a suceder y que de hecho sigue sucediendo en Guatemala, con la agravante de que no se le ha prestado atención por parte de los responsables en dar a conocer la verdad, los responsables de investigar y juzgar y de los juzgadores por no tener la capacidad de pronunciarse para evitar que los recursos que los violadores de derechos humanos plantean retardando los procesos legales.

ASPECTOS A CONSIDERAR PREVIO A DICTAR SENTENCIA

Contexto:

El desplazamiento de la población civil en Guatemala se destaca en la historia del enfrentamiento armado interno acontecido desde 1962 a 1996, por su carácter masivo y su efecto destructor encarna la ruptura del tejido social en su forma más directa y desgarradora. Implica el desmembramiento de familias y comunidades, a la vez que se alternaron los lazos culturales que conformaban su cohesión. El terror sin precedentes, provocado por las masacres y el arrasamiento de poblaciones enteras, desencadenó la huida masiva de gentes diversas, cuya mayoría estaba constituida por comunidades

mayas (...), esta población, campesina por lo común, huyó hacia varios lugares que parecían ofrecer refugio de la muerte.¹⁵

La "Doctrina de Seguridad Nacional" o doctrina del movimiento insurgente acrecentó la intervención del poder militar para enfrentar a la subversión, concepto que incluía a toda persona u organización que representara cualquier forma de oposición del Estado, con lo cual dicha noción se equiparaba a la de "enemigo interno"¹⁶; esta misma doctrina convirtió a la población como objetivo; estableciendo además que *"no se trata de perseguir a delincuentes comunes, sino a personas ideológicamente comprometidos pero que no están participando en actos terroristas o en operaciones de guerra"*.

Según esta doctrina, como una de las consideraciones más importantes para el éxito en la guerra, establece la conquista psicológica de la población y la exaltación de la fé en los valores de la cultura occidental. La población indígena fue identificada como la base social de la guerrilla, además, esta población debía estar a favor o en contra del ejército, por lo que aquellos que no respondían a los intereses o a las condiciones planteadas, eran consideradas enemigos y por lo tanto perseguidos y aniquilados, tal fue el caso de las CPR.

Para 1981-1983, según el informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, la estimación de desplazados oscilaba entre quinientos mil y un millón y medio de personas, sumando las que se desplazaron internamente y también aquellas que se vieron obligadas a buscar refugio fuera del país. Muchos de los desplazados internos, permanecieron en las cercanías de sus comunidades, con la esperanza de poder regresar, sin embargo, la destrucción de sus hogares y la persecución constante del Ejército, obligó a la mayoría a alejarse cada vez más de sus lugares de origen.

La población civil desplazada era considerada, base social insurgente, por lo que se llevaban a cabo en su contra operaciones como la que se encuentra en el Plan de campaña *Firmeza 83*, revelada por la CEH y que determina:

"se deben destruir sus siembras con el propósito de cortarles sus fuentes de abastecimiento y obligarles a que por hambre se rindan o se descubran en sus

¹⁵ Comisión de Esclarecimiento Histórico: Guatemala Memoria del Silencio UNOPS 1999 Capitulo III, Página 119

¹⁶ Ver Anexo "A" alegatos de fecha 30 de diciembre de 2007

desplazamientos por las áreas que frecuenten y poder así combatirlos, con el propósito de desorganizarlos”¹⁷

La población civil fue perseguida y criminalizada, siendo sometida constantemente a amenazas, ataques, bombardeos, ejecuciones extrajudiciales, persecuciones, detenciones arbitrarias, tortura y otras violaciones a sus derechos fundamentales. Los hechos del presente caso se llevan a cabo en la Región Ixil, en contra de población Ixil¹⁸, región en la cual, el grupo de 86 personas de la CPR-Sierra fueron detenidos en 1990. Aspectos de resistencia ya habían sido identificadas en esta población, tal es así que se creó la Operación Ixil que enmarcaba las estrategias en contra directamente de la población.

“Los Ixiles tenían un fuerte poder local, que se opuso desde el principio a la injerencia militar, tenían su propia historia antes de la guerra”¹⁹. El documento El Plan “Apreciación de Asuntos Civiles G5, para la Región Ixil -Operación Ixil-” expone claramente cual era la visión militar en torno a la población Ixil con altos índices de discriminación y racismo²⁰, establece “*Actitud de la población: por sus características históricas y étnicas de la población ixil, es reacia a cooperar con las autoridades ladinas*” Este documento establece inicialmente, que la población ixil, no es acorde al modo de vida de la nación guatemalteca, y que el 50% de esta población colabora con la guerrilla, establecen en el grupo una resistencia pasiva al momento de definir que esta población no presta servicio militar pues el mismo era prestado por indígenas “proclives a la disciplina militar”.

La Operación Ixil presenta propuestas, dentro de las cuales se encuentra la de “realizar todo el esfuerzo (...) para cumplir la misión asignada, intensificando la ladinización de la población ixil de manera que este desaparezca como subgrupo cultural, extraño al modo de ser nacional”. Resalta como ventajas de esta propuesta: que “ladinizar” debe entenderse castellanizar, suprimir el traje distintivo, y otras muestras exteriores diferenciadoras. En este marco, resalta la probabilidad de que “sin características diferenciadoras los ixiles dejen de pensar como tales y acepten todas las abstracciones que constituyen los conceptos de de nacionalidad, patria, etc.”. finalmente otra de las ventajas

¹⁷ Guatemala, Memoria del Silencio CEH, Capítulo II, Violaciones a los Derechos Humanos y los hechos de violencia, Desplazamiento Forzado, párrafo 2977

¹⁸ Hablar de Región Ixil, también significaba hablar de Quichés porque gran parte es del grupo étnico Quiché, Aldea de Palop es Quiché, Aldea de Choatuj es Quiché, Aldea Xexuxcap en Nebaj es Quiché, Aldea de Xexocop en Nebaj, Aldea de Xix, la más grande de Chajul, es Quiché, Aldea de Xolquay, la segunda más grande de Chajul, es Quiché

¹⁹ Peritaje Javier Gurriarán

²⁰ Documento anexo al peritaje presentado por Javier Gurriarán

identificadas en esta propuesta ha sido el que “ya latinizados los ixiles gozarán de los beneficios de nuestra civilización”.²¹

Surge entonces, como parte de esa latinización la figura del Maya Autorizado²², *“Operación Ixil conlleva una desaparición física del pueblo Ixil, o la desaparición como subgrupo cultural; la tarea del Ejército es que los Ixiles cambien, el Ejército va a hacer un nuevo Ixil, va a ver un nuevo maya en Guatemala bajo la vara del Ejército, el Maya permitido o el Ixil permitido o autorizado” (...)* *“Para el viejo Ixil no hay espacio porque esta impidiendo el desarrollo, esta impidiendo la concentración y el entendimiento nacional y que el Estado conserve su identidad, porque tienen un modo de ser contrarios”*.²³

Los aspectos señalados anteriormente, presentan el marco dentro del cual, una población desarrolla la dinámica de autoprotección, de cómo esta población fue identificada como contraria a los intereses nacionales; el ensañamiento y recrudecimiento de violencia en su contra, y la creación de una política en contra de la población Ixil. Inició con el establecimiento de cercos militares, ejecuciones extrajudiciales selectivas, desaparición forzada, masacres, la política de tierra arrasada, destruyendo viviendas, siembras, animales, y todo aquello que permitiera a la población sobrevivir. Pero además incluyó la persecución constante de quienes habían logrado sobrevivir en las montañas, bombardeando y llevando a cabo incursiones para localizar a la población desplazada, la destrucción a su paso de cualquier siembra que fuera localizada y cerrando cada vez más los cercos para evitar que la gente pudiera tener acceso a alimento, o medicina.

*Únicamente en tres casos de masacres registradas por la CEH el poblado no fue quemado; el resto de aldeas donde hubo masacres fueron físicamente destruidas durante o después de la masacre Asimismo, muchas otras aldeas donde no hubo masacres, porque la población huyó, fueron quemadas o destruidas. En general, el periodo de las masacres indiscriminadas o masivas (1981-1982) coincide con la destrucción física de las comunidades, porque ambas violaciones al derecho internacional de los derechos humanos y al derecho internacional humanitario formaban parte de una misma operación, conocida como “tierra arrasada”*²⁴.

Helen Mack expresó: “(...) cuando los subversivos dieron un discurso de existía – solamente- la posibilidad de cambiar la condición de pobreza, pueblos indígenas se vieron

²¹ Un análisis más exhaustivo del contenido de este documento puede apreciarse en el libro de Jennifer Schirmer, *Intimidades del Proyecto Político de los Militares en Guatemala*. Se adjuntó al Peritaje de Javier Gurriarán el Capítulo 5 que contiene dicho análisis.

²² El dibujo se encuentra anexo al Peritaje presentado por Javier Gurriarán.

²³ Peritaje Javier Gurriarán, abril 2008.

²⁴ CEH, Capítulo II, Volumen 3 Genocidio.

identificados con ese discurso, pero fueron vistos como comunistas (...) la forma más fácil era exterminar los pueblos indígenas (...) quitarle al agua al pez" Sin embargo la Comisión de Esclarecimiento Histórico tras el análisis de todos los hechos denunciados, estableció: *"la intención iba más allá del objetivo metafóricamente expresado en el lema: "quitarle el agua al pez"; porque una vez logrado el propósito de vaciar áreas, la población continuó siendo perseguida hasta sus lugares de refugio donde, nuevamente, se ejecutaron matanzas y destrucción de siembras. En otras palabras, las acciones de arrasamiento y persecución denotaron y connotaron una intención de exterminio."*²⁵

La población Maya Ixil fue fuertemente afectada por la campaña militar, al respecto el informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico estableció:

*"Los resultados de esta campaña militar incluyen el asesinato de por lo menos 6,986 personas, entre ellas mujeres, ancianos y niños, de los cuales un 97.8% eran ixiles, habiéndose victimizado al 14.5% de la población indígena que sufrió violaciones graves de los derechos humanos, como torturas, violaciones sexuales y desapariciones forzadas. Junto con la perpetración de matanzas y otros actos de lesión grave a la integridad física y mental, el Ejército arrasó por lo menos el 70% de las comunidades del área Ixil, acompañando estas acciones, algunas veces, de la ocupación o destrucción de lugares sagrados mayas. Esta violencia provocó el desplazamiento de más del 60% de la población, que se vio sometida a condiciones que podían acarrear la muerte por hambre, por frío y enfermedades"*²⁶

Para 1990, la población aun se encontraba envuelta en este marco, aunque ya con un Presidente electo democráticamente, para la época, los desplazados eran comunidades completas. En la Región Ixil, después de la ofensiva de fin de año, en 1987, *"La población en resistencia que sobrevivió en Sumal, logró pasar para resistir al Norte del municipio de Chajul, en las áreas de Santa Clara, Amacchel, Caba y Xeputul"*²⁷, lo que no significaba que fueran los únicos lugares en los que se encontraba resistiendo la población. En ese mismo año, las Comunidades de Población en Resistencia de la Sierra (CPR-SIERRA) salieron a la luz el 7 de septiembre de 1990 dando a conocer su situación de población civil y las condiciones en las cuales sobrevivían; *"ya habían transcurrido 16 años desde que iniciara su formación, la cual fue el resultado de la expresión política organizativa de resistencia, organizados como población, produciendo como población, caminando como población, defendiéndose como población"*²⁸.

²⁵ Idem, párrafo 958

²⁶ CEH, Capítulo II, las violaciones a los Derechos Humanos, Conclusiones Párr 3361

²⁷ Peritaje Javier Gurriaran, abril 2007

²⁸ Idem

La Comisión de Esclarecimiento Histórico en su informe: Memoria del Silencio, concluyó:

“A juicio de la CEH, el conjunto de acciones violentas perpetradas por el Estado contra la población maya-ixil durante los años 1980-1983, permite concluir que se cometieron actos de genocidio, inspirados por una determinación estratégica que también revistió carácter genocida, por cuanto un objetivo de la campaña militar contrainsurgente fue la destrucción parcial del grupo víctima, al considerarse que, de esta manera, se lograría vencer al enemigo”

Para llegar a determinar lo anterior, La Comisión de Esclarecimiento Histórico, llevó a cabo un análisis de las diferentes violaciones ocurridas y documentadas por la Comisión, en las cuatro regiones establecidas, estas fueron: El área Ixil, Norte de Huehuetenango, Rabinal y Zacualpa, concluyendo después del análisis de estas regiones que:

“En las cuatro regiones que, para los efectos de este tema, fueron objeto de la investigación, la violencia fue masiva y afectó en porcentajes abrumadores a la población maya. En el área Ixil y Rabinal la proporción de la población afectada fue del 14.5% y el 14.6% respectivamente, mientras en el norte de Huehuetenango y Zacualpa la proporción de población afectada fue de 3.6% y de 8.6% respectivamente. Asimismo, las víctimas de las matanzas y de otras violaciones de los derechos humanos, recogidas por la CEH, fueron mayoritariamente miembros del pueblo maya, en una proporción mucho mayor que la distribución étnica de la población entre el grupo ladino y el grupo maya En el área ixil se afectó en un 97.80% al pueblo maya, en el Norte de Huehuetenango en un 99.3%, en Rabinal en un 98.8% y en Zacualpa en un 98.4%.”

Desaparición Forzada:

La Jurisprudencia de la Corte Interamericana ha establecido que *“La desaparición forzada constituye una violación múltiple y continuada de varios derechos protegidos por la Convención y que los Estados Partes están obligados a respetar y garantizar. La práctica de desapariciones, a más de violar directamente numerosas disposiciones de la Convención, como las señaladas, significa una ruptura total de este tratado, en cuanto implica el craso abandono de los valores que emanan de la dignidad humana y de los principios que más profundamente fundamentan el sistema interamericano y la misma Convención. La existencia de esa práctica, además, supone el*

desconocimiento del deber de organizar el aparato del Estado, de modo que se garanticen los derechos reconocidos en la Convención".²⁹

La Comisión de Esclarecimiento Histórico estableció que la Desaparición Forzada fue el resultado de la puesta en práctica de la estrategia contrainsurgente implementada en Guatemala por el Estado a través del Ejército, las PAC, Comisionados Militares, Guardia de Hacienda, Policía Nacional, Judicial y Escuadrones de la Muerte. Las víctimas de este tipo de violación de los derechos humanos se encuentran a lo largo de todo el período que cubre el enfrentamiento armado.

Caracterizada por ser un método de exterminio contrainsurgente, con este se perseguía, eliminar físicamente a la persona sin dejar rastro, durante su detención las personas eran sujetas a torturas constantes con el objeto de lograr información, crear terror o castigar a familias, comunidades u organizaciones, puesto que se paralizaba el entorno de la víctima. El Informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico determinó además que la violación sexual era otra de las violaciones que se coexistía con la desaparición forzada.

Este tipo de hechos fue una constante durante el conflicto armado interno, entre las regiones más afectadas con esta práctica se encuentra el Quiché en la cual la Comisión de Esclarecimiento histórico concluyó que se llevó a cabo el 36% de estas desapariciones.

La desaparición forzada crea una extrema incertidumbre sobre el paradero de las víctimas y su estado físico y psicológico, y un sufrimiento prolongado a los familiares³⁰. Este sufrimiento es aun mayor cuando no tienen respuestas a las interrogantes sobre el paradero de sus víctimas, en el caso de Josefa, el no haber tenido oportunidad de conocerla y aún la incertidumbre de la posibilidad, de que aún estuviera ella con vida en algún lugar.

María y Josefa Tíu Tojín y su familia:

María Tíu Tojín, Mujer Maya, hija de Gaspar Tíu y de Josefa Tojín, nació en Parraxtut, municipio de Sacapulas, departamento de Quiché el 15 de noviembre de 1962, según la constancia emitida por la Parroquia Santo Domingo de Guzmán, Sacapulas, el Quiché,

²⁹ Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de 29 de Julio de 1988, parr 155 y 158, Caso Godinez Cruz, Sentencia de 20 de enero de 1989, parr 49, 163 y 166

³⁰ <http://www.odhag.org.gt/html/TOMO2C3 HTM>

Guatemala; lugar en el que fue bautizada el día 22 de noviembre de 1962. Vivió hasta los 18 años en el caserío Segundo Centro, Aldea de Parraxtut.

La historia de María, se desenvuelve durante los años en los cuales daba inicio una de las etapas más fuertes del conflicto armado interno. Tal y como lo relatara Victoriana durante su declaración, en 1980 una noche como a las 7:00 p.m., el ejército irrumpió a la casa de la familia Tíu quienes se encontraban cenando, los militares los acusaron de ser guerrilleros, tomando los soldados a Victoriana y golpeándola, en ese momento Victoriana tenía a una de sus hijas en brazos, quien cayó al suelo.

Los soldados tomaron a Victoriana uno de cada lado y le hicieron el comentario de que "su piel y su sangre decían que ella era guerrillera". Esa misma noche, don Gaspar y María fueron detenidos y Victoriana quedó amarrada y encerrada en la casa aunque posteriormente logró escapar y darse cuenta del momento en que se llevaban a María y a don Gaspar, presenciando además las ejecuciones de otras personas que fueron siendo detenidas en el camino.

María volvió a la comunidad dos meses después, cuando regreso a la aldea iba aun con ropa militar, la gente al verla se alarmó, y la llevaron con Juan Tíu Imul, un conocido de ellos quien les avisó. Relata Victoriana Tíu, que María le contó que ella y su padre fueron llevados al destacamento militar de Chiac y que ahí fueron confinados en dos cuartos diferentes, siendo ella torturada constantemente con descargas eléctricas y que fue violada cotidianamente por miembros del ejército, una vez tras otra, durante todas las noches en que ella estuvo detenida María tenía para ese entonces 17 años. Posterior a las violaciones, le decían: "estas sucia anda a bañarte" y la hacían bañarse con agua fría. Su padre, Gaspar también fue sometido a torturas con shocks eléctricos constantemente. Como lo relatara Victoriana, María le contó que poco antes de que ella pudiera escapar, pudo conversar una vez con su padre quien le dijo estar muy preocupado porque ella era muy joven y no quería que muriera, según el relato, uno de los guardias le dijo que se alistara y se cambiara ya que al otro día la iban a matar, vistiendo mientras que su traje (güipil y corte) se secaba, con un uniforme militar.

Era evidente la tortura bajo la cual se encontró sometida María, Victoriana expresó: *Llegué a la casa y la vi (a María) con la cara deformada con golpes en el rostro, ambas lloramos y nos abrazamos, María me contó que papá se quedó quedado en el destacamento militar"*, María Le

contó que tenía daños físicos, dolores en el estomago, matriz, brazos, cabeza y todo el rostro lo tenía deformado.

María también le contó que había escuchado que el ejército regresaría a quemar las casas, y le dijo a Victoriana que tenía que tener cuidado, mientras tanto Victoriana aun se quedó en la casa de Juan Tíu Imul, posteriormente el ejército llegó a la Aldea a quemar las casas, y con todo el caos, no volvieron a saber de María.³¹

“Después de que se asumió dolorosamente el hecho de haber perdido a sus hijos, otro tipo de incertidumbre se suma a la vida de los familiares. Qué le habrá pasado? Estará vivo o muerto? Probablemente éste es el sentimiento que más daño les provoca y que ha permanecido en los familiares durante todos estos años (...)³²

En este caso no puede perderse de vista, que en cuanto a la familia de María, tuvieron que enfrentar esta situación en relación a María, tres veces, la primera cuando María y su padre fueron detenidos en 1980, seguros de que no volverían a verlos, tuvieron que aceptar la pérdida y seguir luchando por sobrevivir bajo el constante hostigamiento del que eran víctimas, no había tiempo de enterrar a sus muertos, no había tiempo de buscar y llorar a sus desaparecidos.

Posteriormente, en 1981, cuando recién María había regresado a la comunidad bajo las condiciones que ya fueron relatadas por Victoriana, y un tiempo después volvieron a perder a María cuando la población tuvo que poner su vida a salvo con la llegada de militares que llegaron a destruir su comunidad.

Una vez más, enterarse de que después de 9 años de no saber de María, esta estaba con vida y que además era Madre, volver a saber de ella, de que se encontraba nuevamente en manos de sus captores de 1980, conocer las posibilidades de no recuperarla, pues ya ellas habían perdido más familiares bajo esta condición, el esfuerzo por recuperarlas y denunciar el desconocimiento de su paradero y la negación de conocerlo por parte de sus captores a pesar del riesgo que esto podría significar, impulsar la búsqueda y no lograr su objetivo central de ubicar a ambas, constituyen para este caso, la reiteración de violaciones en contra de María, Josefa y sus familiares.

---

³¹ El informe de REMHI documentó cuatro masacres cometidas por ejército, patrulleros de autodefensa civil y comisionados Militares en marzo de 1980, enero 1981, enero 1982, y marzo de 1982

³² Traumas psicosociales: una herencia de la guerra, Claudia María Anleu Hernández, ECAP-USAC

La Detención Ilegal y posterior Desaparición Forzada de María y Josefa Tíu Tojín:

La Comisión de Esclarecimiento Histórico, en el Tomo X, Anexo II, denominado Casos Presentados, documentó que el día 29 de agosto de 1990, efectivos del ejército guatemalteco acompañados por miembros de las PAC, llegaron a la comunidad de Santa Clara, Municipio de Chajul, Departamento del Quiché; acusaron a los residentes, miembros de una comunidad de la Población en Resistencia conocida como "La Sierra" de ser parte de la guerrilla, quemaron milpas y casas, mataron animales y destruyeron víveres, capturándose a 86 personas, entre ellas a la señora María Tíu Tojín y a su hija Josefa.

Además del relato en el Informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, este caso fue ampliamente cubierto por organizaciones internacionales, quienes al momento de tener acceso a hechos de gravedad como el presente, emitían Comunicados Urgentes que se daban a conocer a nivel internacional y nacional, tal es el caso de la Acción Urgente emitida por Amistía Internacional, denunciando justamente la desaparición de María y Josefa, tras la detención de un grupo de 86 personas en Santa Clara, Amacchel. Así mismo Amilcar Méndez de CERJ emitió un comunicado de prensa denuncia la detención de este grupo de personas y la desaparición de María y Josefa.

Lo sucedido en el momento de la detención, fue denunciado al Juzgado de Primera Instancia Penal del Quiché por Victoriana, quien supo de los hechos a través de Magdalena Perpuac, una de las personas detenidas en este grupo de 86 personas, quien le relató a Victoriana que los detenidos fueron llevados hacia Amacchel, donde permanecieron durante 4 días en casas de los patrulleros, siendo llevados constantemente a interrogatorio.

Victoriana expuso durante su declaración que Magdalena también le informó que después el grupo de 86 personas fueron trasladados al destacamento militar de Nebaj, habiendo sido trasladados de Amacchel hacia La Pista, en helicóptero y de este lugar en camiones para el destacamento de Nebaj. En este lugar fueron vistas por última vez María Tíu Tojín y su hija Josefa, según lo relatado por Magdalena, ella había visto cuando hombres del ejército llamaron a María quien llevaba a su hija en brazos y las apartaron del grupo de 86 personas en el momento en que bajaban de los camiones y les daban refacción.

Otros hechos de la detención que aportan a llenar vacíos sobre la detención ilegal hasta la desaparición de María y Josefa fueron aportados como parte del Peritaje presentado por

Javier Gurriarán, quien tuvo conocimiento de estos hechos como parte del proceso de reconstrucción de la memoria de la CPR – Sierra.

Según la información aportada, (...) Santa Clara (...) estaba dividida en distintos grupos o (...) comunidades de resistencia: (...) uno de esos grupos era el de “población Esperanza”, quienes detectaron en la mañana de los hechos una columna del Ejército saliendo de Amacchel y viniendo directo sobre ese grupo (...), el Ejército tiro dos columnas mezcladas, todos con uniforme militar, todos con galil, patrulleros y soldados, tiraron una primera columna que logró verla la vigilancia de La Esperanza, (...) y la comunidad corrió a esconderse bajo un cerrito que quedaba cerca del lugar (...) denominado Caballito, pero el Ejército había enviado otra columna oculta por el otro lado y fue esta otra columna, la que no pudieron visualizar la que logro envolver a la gente en Caballito e hizo la captura de la gente de La Esperanza, ahí estaban escondiéndose para huir de la primera columna. El grupo de población detectado fue cercado, y por eso es que el mismo fue detenido casi integro en manos del Ejército, (...) andando por el camino real para Amacchel, los ubicaron a todos en la Aldea de Amacchel, cuidados por los patrulleros, ahí los dejaron y a los dos días los fueron trayendo poco a poco a prestar declaración con el oficial al destacamento, todos permanecieron en la escuela en Amacchel, rodeados de patrulleros y soldados duraron ahí cuatro días, debido a que había muy mal tiempo cuando fueron capturados y los días siguientes y el helicóptero no podía llegar, entonces fueron regados entres las casas de los patrulleros, poniéndole a María y su hija Josefa un control especial. Según la reconstrucción de las personas que fueron detenidas en Caballito, María ya era la tercera vez que había sido detenida por el Ejército (...) a los ocho días, llegó luego un helicóptero y se los llevaron a la Pista de Nebaj en donde está la pista de aterrizaje en Xejalvité y de ahí se los llevaron en carros militares hasta Nebaj y las fueron dejando en el Centro de la G -Dos, esta es una casa que tenía letreros que se identificaba como tal, que era el antiguo Centro de Salud de Nebaj (...), les dieron dos tortillas a cada uno y queso, y delante de todos salio un oficial de la G-Dos descrito como una persona gorda, grande, piel blanca y llamo a María y la separó de todo el grupo con todo y su hija, y fue la ultima vez que la vieron. Agarraron al resto de gente y del centro de la G-Dos los llevaron a Xemamatze, (...) Todos los entrevistados por el caso de Caballito, del acontecimiento de Santa Clara, mencionan que a los quince o veinte días la “Jacinta” (quien era Jefe de Personal de la CEAR) tenía bebé, que parecía el de María, ese bebé lo ofrecieron, algunos dicen que estaba en venta, y dice que después ofrecieron pagar al que recibiera al bebé, piensa la gente comúnmente que era el bebé de María aunque no saben con certeza.

Muchos de ellos vieron a la familia de María, en especial a Victoriana acudir a Nebaj a buscar a su hermana”.

Como puede observarse las versiones no se diferencian una de otra sino más bien se complementan, por lo que puede establecerse con claridad a los responsables de la detención y posterior desaparición forzada de María Tíu Tojín y su hija Josefa Tíu Tojín. Es importante destacar, que ninguna de estas personas durante su detención fue puesta ante juez que pudiera determinar de forma inmediata su situación jurídica, más bien, fueron tratadas como prisioneras, siendo interrogadas, a pesar de que muchos de los detenidos eran menores de edad.

El 9 de septiembre, el grupo de detenidos fueron entregados a la Comisión Especial de Atención a Refugiados (en adelante “CEAR”) con un listado, María y Josefa no se encontraban entre el grupo pero en el listado se incluían sus nombres en el numeral 83, ya que el listado se encuentra por grupos familiares, los nombres con que se encuentran son “María Tojín García y María Josefa, este listado se encuentra en el Anexo I, de la Demanda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra la República de Guatemala en el caso 10.686.

Acceso a al Justicia:

De los Acuerdos de paz a recientes iniciativas y programas de reforma, Guatemala se ha equipado para luchar por la paz social y la justicia. Se han incrementado las expectativas una y otra vez, pero rara vez se han convertido en resultados. La inseguridad y la inequidad prevalecen y una historia de oportunidades fallidas ha creado un desencantamiento en una población ansiosa de cambios.

Nada puede ejemplificar mejor esto que el retraso con el que se han encontrado las víctimas del conflicto armado interno para obtener justicia y reparación. Donde la impunidad es la regla en lo que respecta a violaciones del pasado, no debería sorprender que también prevalezca para crímenes del presente ³³

---

³³ Pronunciamiento de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Sra. Louise Arbour, tras su visita a Guatemala (24 al 27 de mayo del 2006) Mayo 27, 2006

La familia de María no supo más sobre su paradero desde 1981, dándola por muerta y dado el incremento de la violencia estatal, se vieron imposibilitados a llevar a cabo acciones de denuncia y búsqueda. Envueltos en la coyuntura, y en la necesidad de salvaguardar sus propias vidas, algunos se vieron en la necesidad de abandonar el país.

En 1990, cuando Victoriana tiene conocimiento de la detención ilegal de María así como de la existencia de una sobrina, Josefa, Victoriana inició todo el proceso de búsqueda y denuncia con el afán de que ambas fueran liberadas.

- Iniciando para la búsqueda con su visita al Destacamento Militar de Nebaj, lugar en el que le negaron tener conocimiento del paradero de María y Josefa.
- Posteriormente se dirigió a la CEAR, lugar en el cual tuvo oportunidad de conversar con algunas de las personas que habían sido detenidas juntamente con María, quienes le comentaron de cómo se dieron los hechos, y el momento en el cual María y Josefa fueron retiradas del grupo y no volvieron a saber más de ella.
- El 23 de septiembre de 1990, Amilcar Méndez, Presidente de Runujel Junam denunció la captura ilegal de 86 campesinos. El 4 de noviembre de 1990, Victoriana presenta un Recurso de Exhibición Personal ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Departamento de Quiché.
- Se presentó denuncia correspondiente a la Procuraduría de Derechos Humanos, quienes interpusieron recurso de exhibición personal.
- María interpuso recurso de exhibición personal a favor de María y Josefa ante el Juez segundo de Primera Instancia Penal de Quiché
- Bárbara Frey, abogada internacional quien se enteró del caso a través de las acciones urgentes emitidas, interpuso Recurso de Exhibición Personal ante el mismo Juez.
- Se llevaron a cabo acciones urgentes por parte de organizaciones nacionales e internacionales.
- CERJ presentó Recurso de Exhibición Personal.
- Victoriana y Amilcar Méndez sostuvieron una reunión con el Presidente de la República.
- El Juez segundo de Primera Instancia Penal de Santa Cruz el Quiché, escucho la declaración de Magdalena Perpuac quien expuso los hechos ocurridos desde la detención hasta la desaparición de ambas víctimas.
- Finalmente, el 30 de enero de 1991, el Juez segundo de Primera Instancia Penal de Santa Cruz del Quiché, resuelve su Incompetencia para seguir conociendo el

proceso inhibiéndose de conocer y traslada el expediente a la Fiscalía Militar No. 20 del Quiché.

- Se inicia el expediente el 06 de febrero de 1991, quedando la investigación bajo la responsabilidad de la Auditoría de Guerra. Dentro de este proceso se recibieron declaraciones testimoniales y una declaración indagatoria de diferentes personas que estuvieron destacadas en Santa María Nebaj, el 9 de septiembre, fecha en la cual fue la última vez en que María y Josefa fueran vistas. Ninguna de estas declaraciones muestran la intención de lograr resultados en cuanto al paradero de las víctimas.
- Cabe resaltar que entre las diligencias llevadas a cabo por la Auditoría de Guerra, se solicitó al Alcalde del Municipio de Sacapulas, enviar certificación de CONDUCTA de María Tíu Tojín o María Tojín García y Victoria Tíu Tojín. Así mismo al Alcalde Auxiliar de Santa Clara, certificación de conducta de Magdalena Perpuac; solicitando además a la cárcel de mujeres de esa ciudad, informe al respecto de que si alguna de estas tres mujeres había sido detenida alguna vez y por que delitos o faltas. Reiteramos, el proceso ante Auditoría de Guerra, no incluyó diligencias que pudieran considerarse adecuadas y tendientes a esclarecer de forma inmediata el paradero de María y Josefa Tíu y por ende su recuperación.
- La falta de respuesta estatal a las denuncias, motivó la presentación de este caso a la Comisión Interamericana, sin embargo, a pesar de que el Estado tuvo conocimiento nuevamente oportunidad de conocer los hechos, y pesar del conocimiento de su responsabilidad en cuanto a las violaciones alegadas, se ha denegado el acceso a la justicia a los familiares, sin que hasta el momento se haya llevado a cabo ninguna diligencia por parte del órgano responsable de investigar y esclarecer los hechos ocurridos.

Principales Obstáculos para el Acceso a la Justicia:

La Comisión de Esclarecimiento Histórico estableció a este respecto que:

“La impunidad selectiva que garantizaba una ausencia total de castigo para las autoridades y sectores dominantes, situación en la cual existía corresponsabilidad del sistema de justicia, fue uno de los procesos principales que hizo que la población guatemalteca ratificara y profundizara su desconfianza en las leyes y los diversos organismos de aplicar justicia. La falta de investigación de los casos políticos y de otros relacionados con el enfrentamiento armado, así como la ausencia casi total de condena en los mismos aportó un elemento determinante para sustentar ese recelo

En todos los hechos conocidos en los que, según conclusiones de la CEH existió planificación institucional del ejército, no se ha condenado siquiera a un oficial de alto rango”³⁴

Al respecto Helen Mack en su peritaje, claramente ha establecido los principales obstáculos de acceso a la justicia, entre estos obstáculos los relacionados al acceso por parte de pueblos indígenas. Estableciendo además que existe una *Impunidad de Hecho y no de derecho*.

Uno de los principales obstáculos en este caso, son los recursos económicos; los familiares de María y Josefa, agricultores de escasos recursos, lo que no les permitiría de ninguna manera asumir los costos de representación de un abogado para constituirse formalmente como Querellantes e impulsar la investigación de este caso; *“Querellarse significa cada memorial tiene un costo económico que no baja de 500 quetzales (...) si es respuesta de un Amparo puede tener un costo de 10,000 quetzales o más haciendo inaccesible el acceso a la justicia a las víctimas, si se tiene la carga de la prueba y uno quiere que se investigue debe poner carros para llevar a los fiscales a las diligencias, pagar los almuerzos de fiscales, jueces, policías, incrementando (...)”³⁵*.

Formalmente, los familiares de las víctimas no deberían de tener la necesidad de absorber estos costos, debido a que la persecución penal está en este caso, de oficio a cargo del Ministerio Público, sin embargo como ha sucedido en otros casos de graves violaciones a los derechos humanos, la inactividad de este órgano ha forzado a que los familiares se Querellen e impulsen sus propios procesos, teniendo además la carga de investigar y entregar elementos de prueba al Ministerio Público que respalden el caso, poniéndolos en una situación de riesgo y vulnerabilidad innecesarios.

El idioma de los familiares de María y Josefa es K’iche’, como pudo observarse durante la audiencia, requieren de traducción que les facilite el poder transmitir la información y solicitar la misma. Los principales órganos de administración de justicia –Organismo Judicial y Ministerio Público- no cuentan con un servicio permanente de traductores, por lo cual se dificulta en mayor grado la posibilidad de que se impulse el proceso por sí mismos.

³⁴ CEH, Capítulo Tercero, “Efectos y consecuencias del enfrentamiento armado”, párrafo 4025

³⁵ Presentación de Peritaje, Helen Mack, Audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Honduras 30 de abril de 2008

De igual manera, la discriminación y racismo de los operadores de justicia hacia las población indígena y pobre, no permite o facilita la presentación de denuncias, su impulso y mucho menos el lograr llegar a un juicio por alguna de las causas relacionadas al conflicto armado interno, cuando muchas de las personas que fueron víctimas de graves violaciones, en su mayoría de la población indígena, son acusadas de comunistas y guerrilleras al pretender denunciar alguno de estos hechos.

Este caso ejemplifica la reacción de los órganos encargados de administrar justicia, cuando se trata de la persecución de graves violaciones a los derechos humanos, aún cuando exista una fiscalía especializada para la investigación de este tipo de hechos. Como ha sido expuesto en los alegatos del 30 de diciembre de 2007, y como se observa de la respuesta del Estado a estos alegatos: Al determinarse el Acuerdo de Solución Amistosa en el año 2005, el caso fue dado a conocer a la Fiscalía de Derechos Humanos, Unidad de Esclarecimiento Histórico, desde entonces al 2007 no se llevó a cabo ninguna diligencia relacionada para que el Tribunal Militar se inhibiera de conocer, más bien se pretendía que los representantes de las víctimas solventaran tal situación a través de una reunión con el Ministerio de Defensa. *“Cuando el Ministerio Público no esta a favor de las victimas le exige que sea responsable de llevar la prueba y enfrentarse al Ministerio de Defensa”*³⁶.

En conclusión, como parte de la población maya, los obstáculos principales a afrontar por los familiares de las víctimas, se encuentra principalmente en el costo económico que no se centra únicamente en el pago de representación sino además el costo que significa dejar de trabajar uno o más días y pagar el costo para poder movilizarse desde sus comunidades hacia los juzgados y Ministerio Público más cercano para el impulso de los procesos, con el agravante de que muy posiblemente al llegar a estas oficinas no sean atendidos por la falta de traductores y/o ser discriminados o coartados en su declaración por ser considerados comunistas/guerrilleros. *“Costo económico, si te vas a pie dejas varios días de trabajo, viajando por camioneta a veces no hay carreteras suficientes para poderlo hacer, tiene un costo muy alto el poder trasladarse”*³⁷

El abuso de los recursos dificulta aun más el avance de los procesos, aumentando costos y alargando los procesos.

---

³⁶ Presentación de Peritaje, Helen Mack, Audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Honduras 30 de abril de 2008 Respuesta a la pregunta: cual es la reacción o acción de los órganos encargados de administrar justicia, cuando los presuntos responsables son miembros del ejército Guatemalteco?

³⁷ Idem

Falta de Certeza Jurídica:

*"Hay una falta de certeza jurídica en casos de violaciones a los derechos humanos, por ejemplo se ha aplicado la Ley de Reconciliación Nacional por el Tribunal de Sentencia en el caso del Jute, a pesar de que en su artículo 8, establece claramente que a los delitos de lesa humanidad no le es aplicable esta ley"*³⁸

El caso referido anteriormente es un caso por Desaparición Forzada que ha sido impulsado por la Procuraduría de Derechos Humanos. Esta falta de certeza jurídica es otro de los obstáculos a los cuales se enfrentan este y otros 45,000 casos enmarcados en este tipo penal, y es que a pesar de que Guatemala desde 1996 ha incluido en el Código Penal Guatemalteco la tipificación de este delito, las resoluciones judiciales se basan principalmente en la voluntad, vínculos, intereses, e interpretación del juzgador, lo que es aprovechado muchas veces por la defensa de los acusados.

*Se ha alegado incluso la irretroactividad de la Desaparición Forzada, no quieren aceptar que es un delito continuado, (...) no permite a las víctimas tener una certeza sobre los casos de desaparición forzada"*³⁹ Razón por la cual consideramos que es importante que la Honorable Corte establezca como parte de la Sentencia, una caracterización sobre los hechos en este caso, reiterando al Estado el carácter pluriofensivo de la desaparición forzada el cual ha sido reconocido desde temprana fecha y en diversas oportunidades por la Corte Interamericana de Derechos Humanos:

*"La desaparición forzada de personas es un fenómeno diferenciado caracterizado por la violación múltiple y continuada de varios derechos consagrados en la Convención, pues no sólo produce una privación arbitraria de la libertad, sino viola la integridad y la seguridad personal y pone en peligro la propia vida del detenido, colocándolo en un estado de completa indefensión y acarreado otros delitos conexos "*⁴⁰

De igual manera, es de interés particular para el impulso de este caso a nivel de verdad y justicia, así como de cualquier otro que pueda entablarse a nivel nacional en relación a la desaparición forzada, reiterar al Estado de Guatemala que:

"La desaparición forzada de seres humanos constituye una violación múltiple y continuada de numerosos derechos reconocidos en la Convención y que los Estados Partes están obligados a respetar y garantizar. El secuestro de la persona es un caso de

³⁸ Presentación de Peritaje, Helen Mack, Audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Honduras 30 de abril de 2008

³⁹ Idem

⁴⁰ Corte IDH, Caso Gómez Palomino vs Perú, doc cit, párrafo 92

privación arbitraria de libertad que conculca, además, el derecho del detenido a ser llevado sin demora ante un juez y a interponer los recursos adecuados para controlar la legalidad de su arresto, que infringe el artículo 7 de la Convención que reconoce el derecho a la libertad personal [...].”⁴¹

Reiteramos nuestro interés de resaltar el carácter de pluriofensivo de la desaparición forzada, así como su “continuidad” ya que es importante que al resolver esta Corte, considere que a pesar de la existencia de un reconocimiento por parte del Estado, en materia de su responsabilidad internacional por la falta de protección, a los derechos de María y Josefa, la simple aceptación de su responsabilidad, aunque es reconocida no es ni ha sido suficiente para detener los efectos de la desaparición forzada, que van mucho más allá del momento en que ambas víctimas fueron detenidas ilegalmente, y desaparecidas por miembros del ejército, hecho que se ha perpetuado durante estos 18 años en los cuales, no fueron presentadas a ningún órgano competente para establecer su situación jurídica, fueron limitadas en su libertad personal, presumiendo los graves daños a su integridad personal así como la posibilidad de que ambas ya no se encuentren con vida.

A la vez, se han perpetuado estas violaciones en contra de sus familiares, ya que hasta el momento ellos tampoco han logrado acceder a la justicia, ser escuchados, y respetados en cuanto a sus exigencias de establecer el paradero de sus familiares y a los responsables de los hechos, limitándose el Estado a la autodefensa de quienes pudieran estar involucrados debido a su pertenencia al ejército de Guatemala.

Sin embargo, la impunidad de estos hechos podría seguirse perpetuando en el tiempo, si el Estado de Guatemala no toma acciones concretas para eliminar los obstáculos y limitaciones que se han enumerado en cuanto al acceso a la justicia por familiares de víctimas y sobre todo de población indígena. Acciones que deben ser encaminadas a que la normativa existente brinde certeza con independencia de lo que el juzgador interprete.

Otro ejemplo de la falta de certeza jurídica ha sido la resolución de diciembre de 2007 emitida por la Corte de Constitucionalidad en el caso de Extradición de los responsables de Genocidio, caso que está siendo ventilado ante la Audiencia Española, en dicho fallo la Corte realiza una nueva reinterpretación a la Ley de Reconciliación Nacional que pone en riesgo la posibilidad de llevar a juicio graves violaciones a los derechos humanos cometidos durante el conflicto armado interno.

---

⁴¹ Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, doc. cit., párrafo 155.

Fuero Militar:

En relación al fuero Militar, se presentó en el Congreso de Guatemala la iniciativa que lleva por nombre Código Militar, No. 2794, presentada el 7 de noviembre de 2002.

Este es otro de los elementos que no contribuyen a que las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos no tengan certeza jurídica en relación a la tramitación de sus procesos, ya que puede observarse en el Congreso el avance de normativa que no es acorde a la responsabilidad del Estado de llevar a cabo todas las acciones necesarias para evitar que se lleven a cabo violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así mismo contraviene otros tratados y Convenios ratificados por Guatemala, El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas, así como la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, entre otros.

Este proyecto de ley desconoce importantes disposiciones del derecho internacional de los derechos humanos y la jurisprudencia que existe sobre tribunales militares, Reviste especial gravedad que ciertas disposiciones claves de los proyectos sean manifiestamente contrarias a la normativa y jurisprudencia internacionales sobre la materia y a principios básicos del estado de derecho, así como desacordes con el espíritu y letra de los Acuerdos de Paz.⁴² En particular, el ámbito de competencia que se le confiere a la jurisdicción militar desconoce por completo lo prescrito en esta materia por el derecho internacional y la doctrina y jurisprudencia internacionales de órganos de derechos humanos. Además de constituir un inmenso retroceso respecto de la actual regulación constitucional y del Decreto 41-96, de adoptarse tales disposiciones legislativas, Guatemala comprometería su responsabilidad por desconocimiento de sus obligaciones internacionales.

El 21 de enero de 2003 se dio lectura del anteproyecto de Código Militar en el Pleno del Congreso, remitiéndose el mismo a las comisiones de Legislación y Puntos Constitucionales y de la Defensa Nacional. El 30 de noviembre de 2004, la Comisión de la Defensa Nacional del Congreso de la República elaboró cuatro dictámenes favorables, los cuales sometió a consideración del pleno del Congreso. Los dictámenes se hicieron con “un intercambio periódico de informes, estadísticas y reuniones con el Departamento de justicia militar del Ministerio de la Defensa Nacional”. Pese a determinadas modificaciones, persisten graves deficiencias en el proyecto.

A partir de dicho momento, el proyecto de Código Militar se presenta como un conjunto

---

⁴² Pronunciamiento de la Comisión Nacional para el Seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia en un comunicado de prensa. Ver Comunicado de prensa de la Comisión Nacional para el Seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia, *Iniciativa de ley número 2794, Código Militar*, mayo de 2005

orgánico de cuatro leyes que regulan aspectos sustantivos y adjetivos del Derecho Penal Militar, el sistema de organización de la justicia penal militar y el sistema penitenciario militar. De esta forma, la iniciativa se transformó en los siguientes proyectos legislativos:

- Ley Penal Militar
- Ley de Competencia de los Juzgados y Tribunales Militares y Remisión del proceso penal militar a las disposiciones del Código Procesal Militar
- Ley de Organización y funcionamiento de la Justicia Militar
- Ley Penitenciaria Militar

El 21 de Septiembre de 2005, la iniciativa 2794 pasó a primer debate en el Congreso de la República.

A continuación señalamos algunos de los aspectos más relevantes del contenido de dicha iniciativa:

En el proyecto de Ley procesal penal militar, la jurisdicción de los tribunales militares se establece en los siguientes términos:

Artículo 1. Competencia. Los Juzgados y Tribunales serán competentes en materia penal para conocer de:

1. Los delitos contenidos en la Ley Penal Militar.
2. Los delitos y faltas contenidos en la legislación penal ordinaria, cuando estos sean cometidos por personal militar de acuerdo al artículo 5 de la ley penal militar. El artículo 5 del proyecto de ley penal militar establece:

En el Ámbito Personal establece.

La presente ley será aplicada al personal militar siguiente:

1. Oficiales de carrera, de reservas y asimilados, especialistas y tropa que se encuentre prestando servicio militar.
2. Quienes se encuentren prestando el servicio militar en las reservas militares, por el tiempo en que efectivamente se encuentren en entrenamiento o en cumplimiento de una orden o acto del servicio.
3. Quienes se encuentren estudiando en las diferentes academias, escuelas o centros de formación militar, siempre que fueran mayores de edad.
4. Quienes presten servicio militar al ser movilizados por decisión del Gobierno, mientras dure esta situación.
5. Oficiales y especialistas en situación de retiro, cuando el hecho delictivo se haya perpetrado durante el tiempo que causaron alta.
6. Personal de tropa de baja, cuando el hecho delictivo se haya perpetrado durante el tiempo que permaneció de alta.
7. En tiempo de guerra, la ley penal militar se extenderá, a los prisioneros de guerra, en lo que no se contravenga al derecho internacional humanitario.

Es importante citar también la disposición del proyecto de ley procesal penal militar que establece cómo seguirán los procesos en trámite una vez se aprueben los proyectos:

Artículo 7. Procesos penales militares en trámite. Aquellos procesos penales militares que se encuentren en trámite, al momento de la entrada en vigencia del presente decreto, serán remitidos para su conocimiento inmediatamente cuando entren en funcionamiento los órganos judiciales militares, salvo en aquellas causas que se haya dictado el auto de apertura a juicio.

El principio *pacta sunt servanda* y su corolario han sido acrisolados en los artículos 26 y 27 de la *Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados*. La Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó que: “Según el derecho internacional las obligaciones que éste impone deben ser cumplidas de buena fe y no puede invocarse para su incumplimiento el derecho interno. Estas reglas pueden ser consideradas como principios generales del derecho y han sido aplicadas, aún tratándose de disposiciones de carácter constitucional, por la Corte Permanente de Justicia Internacional y la Corte Internacional de Justicia”

Asimismo, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha subrayado que “la legislación nacional no puede modificar las obligaciones internacionales contraídas por un Estado Parte en virtud del Pacto.”

Como puede observarse con estos artículos transcritos, la aprobación de una ley con este contenido sería un grave retroceso en materia de Derechos Humanos, aseguraría la impunidad en Guatemala bajo un marco normativo que atenta contra la Constitución Guatemalteca, los Acuerdos de Paz y principalmente contra la dignidad de las víctimas y familiares del conflicto armado interno.

Nuevos Elementos:

Recientemente fuimos informados, sin contar con el tiempo suficiente para recibir la una declaración formal y adjuntarla a estos alegatos, que como parte de los procesos de recuperación de la memoria colectiva que se llevan a cabo en la Región Ixil, al hacer revisión de relatos, los investigadores identificaron información que podría estar ligada a la Desaparición de María, se presenta en este momento a la Honorable Corte, como un nuevo elemento que debe ser investigado en su momento por el Ministerio Público Guatemalteco pero que, consideramos de importancia, informar al respecto.

Dos personas que fueron entrevistadas en diferentes municipios de la Región Ixil, manifestaron que fueron parte de un pequeño grupo detenido aproximadamente quince días después a la captura del Caballito del 29 de agosto, siendo trasladados al destacamento de Amacchel, lugar en el cual les dijeron que debían comer bien porque serían trasladadas caminando hacia otro lugar. Según estas personas, les sirvieron caldo con carne, al terminar de comer les preguntaron si les había gustado, al responder que sí, los soldados les dijeron *“que bueno que les gusta la carne de guerrillera”*, ambas personas comentan que al decir esto, uno de los soldados sacó un brazo de la olla y se los mostró, diciendo además, *“esta es una guerrillera que capturamos hace unos días, cuidense ustedes para que no les vayamos a hacer lo mismo”*, estas personas comentan que podía haber sido la mujer que desapareció del grupo de 86 personas del Caballito.

Algunos hechos de canibalismo o antropofagia fueron documentados en el Informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico así como el informe REMHI, estableciendo que:

“Una de las formas más cruentas de desvalorización de la vida que registra la CEH, será algunos actos de coprofagia y antropofagia que se realizaron dentro de la estrategia contrainsurgente. Estos actos de crueldad extrema fueron efectuados por elementos del Ejército, quienes también obligaron a personas detenidas a realizarlos. En los casos testimoniados ante la CEH, las víctimas fueron miembros de comunidades indígenas”:

“Mi papá se quedó en Yanwitz. Cuando llegó el Ejército lo agarraron los soldados ... le amarraron pies y manos y le golpearon y patearon. En la mañana siguiente dijeron los soldados a mi papá que van a comer su carne. Llevaron a mi papá hasta Taxbal (cerca de Río Zarco, Río Azul) y mientras maltratándole Pasaron por Bella Linda hasta que llegaron al destacamento Ixquisis. Le acusaron de ser guerrillero, le obligaron a comer carne humana”;

“A fines de 1983, alrededor del 26 de diciembre, en la aldea La Cumbre, Ixtahuacán... llegaron soldados enmascarados y sacaron aproximadamente 35 personas de la aldea, y las llevaron a la zona militar ... Las acusaron de ser guerrilleros ... Los metieron en un calabozo ... estaban con sed y hambre, no les dieron ni comida ni agua. Se tomaban sus orines ... [Había otro grupo de personas capturadas que] habían sido torturadas allí mismo. Los soldados les cortaban pedazos de carne de los cachetes y los brazos ... y se los comían [El declarante dice que ya conoce el infierno] He estado allí”⁴³

---

⁴³ CEH violaciones a los Derechos de la existencia, integridad e identidad Cultural de los pueblos Indígenas Capítulo II, Volumen 3 Los casos que aquí se mencionan son los documentados en el CEH C 6024 Agosto, 1982 San Mateo Ixtatán, Huehuetenango; y C 12027 1983 Ixtahuacán, Huehuetenango Otros casos de canibalismo forzado de notable crueldad se produjeron en Baja Verapaz, entre julio y diciembre de 1981, en una operación conjunta entre el Ejército y las PAC de

Como hemos manifestado anteriormente, esta información es trasladada como un nuevo elemento que podría estar relacionado a la desaparición de María, mismo que es necesario se retome por el órgano responsable de la investigación. De estos hechos, es posible presentar, si la Corte lo considera pertinente, declaraciones debidamente firmadas por quienes han proporcionado esta información directamente.

Hechos Establecidos.

En la época en la que sucedieron los hechos, la desaparición forzada de personas constituía una práctica del Estado llevada a cabo principalmente por agentes de sus fuerzas de seguridad. La finalidad de esta práctica era la desarticulación de los movimientos u organizaciones que el Estado identificaba como próclives a la "insurgencia" y extender el terror en la población;

En relación a los responsables de los hechos, con la información hasta el momento aportada, se establece que la desaparición de María y Josefa en 1990 es responsabilidad directa de agentes del Estado, específicamente miembros del ejército guatemalteco, ya que fueron estos los que llevaron a cabo la detención ilegal de María y Josefa, así como del traslado de los detenidos a CEAR

María Tíu Tojín, era una mujer Maya Indígena que nació en Parraxtut, municipio de Sacapulas, departamento de Quiché el 15 de noviembre de 1962, hija de Gaspar Tíu y Josefa Tojín. Vivió hasta los 18 años en el caserío Segundo Centro, Aldea de Parraxtut.⁴⁴

María y su padre Gaspar, fueron detenidos por el ejército en 1980, reteniéndola por un tiempo de dos meses, tiempo en el cual fue sometida a graves vejámenes y torturas en las cuales se incluían toques eléctricos y violación sexual diariamente, con la consecuente humillación, e infligiéndole daños físicos y psicológicos. El señor Gaspar Tíu, padre de la víctima, fue víctima también de constantes torturas, habiendo desaparecido desde ese entonces.

Josefa era una niña de aproximadamente un mes de nacida, ella y su madre María formaban parte en 1990 de las Comunidades de Población en Resistencia CPR de la Sierra.

Rabinal, los soldados sacaron las orejas a seis personas y se las obligaron a comérselas, C 883 1981 Chateguá, Rabinal, Baja Verapaz

⁴⁴ Ver Anexo D

El día 29 de agosto de 1990, miembros del ejército guatemalteco y patrulleros de auto defensa civil, llegaron a la Comunidad de Santa Clara, Municipio de Chajul, Departamento del Quiché, acusando a los residentes, de ser guerrilleros; quemaron milpas, casas, mataron animales y destruyeron viveres. Este grupo era parte de las Comunidades de Población en Resistencia. En ese momento fueron detenidas ilegalmente 86 personas, en su mayoría mujeres y niños, trasladadas al destacamento de Amacchel donde permanecieron capturadas y fueron interrogadas. Posteriormente fueron trasladadas en helicóptero a la Pista en Nebaj y de aquí hacia el Destacamento Militar de Nebaj en camiones, donde al momento de descender, oficiales del ejército guatemalteco separando a María y Josefa del grupo siendo esta la última vez en que ambas víctimas fueron vistas.

Los hechos sucedidos a María y Josefa se enmarcan como parte de la Política Genocida ejecutada por el Estado Guatemalteco durante el conflicto armado interno, en este caso específico como parte de las tácticas específicas contra la población Ixil que fueron establecidas concretamente en el Plan de Operaciones Ixil, cuyo contenido racista y discriminatorio define las acciones a tomar con el objeto de hacer desaparecer a la población ixil como subgrupo cultural, extraño al modo de ser nacional.⁴⁵ Además de la identificación de la población indígena como "enemigo Interno".

La denegación de justicia por más 18 años, ha generado un profundo dolor a los familiares de María, denegación que ha sustentado una violación reiterada y constante en contra de María y Josefa como de sus familiares ya que hasta la fecha se ha negado información sobre su paradero, negando de esta forma el derecho pleno de conocer la verdad y acceso a la justicia.

MEDIDAS DE REPARACION.

La responsabilidad internacional del Estado.

"Es un principio de Derecho Internacional, que la jurisprudencia ha considerado incluso una concepción general de derecho" que toda violación a un obligación internacional que

---

⁴⁵ Plan de Operaciones Ixil, anexo del Peritaje de Javier Gurriarán

haya producido un daño comporta el deber de reparación adecuada. La indemnización, por su parte, constituye la forma más usual de hacerlo.⁴⁶

La responsabilidad del Estado se encuentra determinada por el derecho internacional no sólo en cuanto a la tipicidad de la violación, sino que en todo lo que tenga relación con las consecuencias del hecho dañoso. La obligación contenida en el artículo 63.1 de la Convención es de derecho internacional y éste rige todos sus aspectos, como, por ejemplo, su extensión, sus modalidades, sus beneficiarios, etc. Por ello, la presente sentencia impondrá obligaciones de derecho internacional que no pueden ser modificadas ni suspendidas en su cumplimiento por el Estado obligado, invocando para ello disposiciones de un derecho interno.⁴⁷

Según la tesis clásica del derecho internacional público la “reparación es la consecuencia principal de la responsabilidad internacional del Estado”. La naturaleza de dicho efecto es de carácter compensatorio y no punitivo, tal como lo ha establecido la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia⁴⁸. Atendida su naturaleza compensatoria y no punitiva, el límite estableció para la reparación es el perjuicio causado por el ilícito cometido, es decir, en la especie se recurre al principio de la equivalencia de la reparación con el perjuicio”.

La doctrina de la Corte Internacional de Justicia:

“El principio general que está implícito en el concepto de acto ilícito (...) es que en la medida de lo posible, la reparación debe anular todas las consecuencias del acto ilícito y restablecer la situación que probablemente hubiera existido de no haberse cometido dicho acto. Restitución en especie, o si ello no es posible, pago de una suma equivalente al valor

⁴⁶ Caso Velásquez Rodríguez – indemnización compensatoria, párr. 25 en el mismo sentido Caso Godínez Cruz – indemnización compensatoria párr. 23. Asimismo la Corte cita fallos de otros tribunales en que se ha sostenido la misma doctrina: Caso Factory at Chorzow, Jurisdiction, Judgment N 1927 PCIJ Series A, N 9 p 21 y Factory at Chorzow, Merits, Judgment N 13 1928 PCIJ, Series A, N 17, p 29 y Reparation for injuries suffered in the service of the United Nations, Advisory opinion, ICJ, Reports 1949, p 184.

⁴⁷ La jurisprudencia que ha tenido a la vista la Corte para resolver: Caso Velásquez Rodríguez - indemnización compensatoria, párr. 30; Caso Godínez Cruz – indemnización compensatoria, párr. 28; Jurisdiction of the Courts of Danzig, advisory opinion, 1928, PCIJ, Series B, N 15, pp 26 y 27; Questions des “communautés” gréco-bulgares, avis consultative, 1930, C P J I, Serie B, N 17, pp 32 y 35; Affaire des zones franches de la Haute – Savoie et du pays de Gex (deux – ième phase), ordonnance du 6 decembre 1930, C P J I, Serie A, N 254, p 12, Affaire des zones franches de la Haute-Savoie et du pays de Gex, arrêt, 1932, C P J I, Serie A/B No 46, p 167; Traitement des nationaux polonaise et des autres personnes d’origine ou de langue polonaise dans le territoire de Dantzig, avis consultative, 1932, C P J I, Serie A/B, No 44, p 24 Citada por la Corte IDH, Caso Aloeboetoe y otros – reparaciones sentencia 10 de septiembre de 1993, Serie C No 15, párr. 44.

⁴⁸ CIJ, Caso Estrecho de CORFO, sentencia de 9 de abril de 1949.

que tendría la restitución en especie, otorgamiento de ser necesario, de una indemnización por los daños sufridos que no hayan sido reparados por la restitución en especie o por el pago en efectivo; tales son los principios que deben servir para determinar el monto de una indemnización por un acto contrario al derecho internacional”⁴⁹

Por su parte, la Corte Interamericana ha establecido:

“La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional requiere, siempre que sea posible, la plena restitución (restitutio in integrum), la cual consiste en el restablecimiento de la situación anterior. De no ser esto posible, como en el presente caso, cabe al tribunal internacional determinar una serie de medidas para, además de garantizar los derechos conculcados, reparar las consecuencias que las infracciones produjeron, así como establecer el pago de una indemnización como compensación por los daños ocasionados”⁵⁰

BASE LEGAL.

El artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos humanos establece: “1. Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá así mismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.”

Así mismo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe 79/04 emitido durante el 121º. Periodo de sesiones, elaboró la siguiente recomendación al Estado:

“3. Adoptar las medidas necesarias para la ubicación y devolución de los restos de María Tíu Tojín y Josefa Tíu Tojín a su familia. Así mismo, adoptar las medidas conducentes para que los familiares de las víctimas reciban una adecuada y pronta reparación por las

⁴⁹ CIJ, Caso Fábrica Chorzow, Serie A No 17 párr 47

⁵⁰ Caso Trujillo Oroza – reparaciones, párr 61; Caso Bámaca Velásquez – reparaciones, párr 39, Caso Cantoral Benavides – reparaciones, párr 41; Caso Durand y Ugarte – reparaciones, párr 25; y Caso barrios Altos – reparaciones párr 25 En el mismo sentido Caso Velásquez Rodríguez – indemnización comepnatoria, párr 25

violaciones aquí establecidas, que incluya indemnización, reconocimiento público de los hechos y el pedido de perdón a los familiares de las víctimas por parte del Estado.”

En atención al análisis y contenido de cada uno de los apartados que forman este documento, se presenta la siguiente propuesta elaborada con estricto apego a los criterios y principios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto al pago de una indemnización justa para víctimas de violaciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

TITULARES DEL DERECHO DE REPARACION.

En este caso, los titulares del derecho de reparación son directamente los familiares de ambas víctimas, al respecto La Corte Interamericana ha señalado que:

“Es conveniente destacar lo indicado por el artículo 2.15 del Reglamento⁵¹, en el sentido de que el término “familiares de la víctima” debe entenderse como un concepto amplio. Dicho concepto comprende a todas las personas vinculadas por un parentesco cercano, incluyendo a los padres, hijos y hermanos que podrían tener derecho a indemnización, en la medida en que satisfagan los requisitos fijados por la jurisprudencia de este Tribunal. En este punto la Corte debe presumir que la desaparición de una persona o su muerte como consecuencia de la desaparición ocasiona un daño innmaterial a los miembros más íntimos de la familia, particularmente a aquellos que estuvieron en contacto afectivo estrecho con la víctima”⁵²

1. Josefa Tojín Imul, Madre y abuela de las víctimas respectivamente.
2. Victoriana Tíu Tojín, Hermana y tía de las víctimas.
3. Rosa Tíu Tojín, Hermana y tía de las víctimas.
4. Juana Tíu Tojín, Hermana y tía de las víctimas.
5. Pedro Tíu Tojín, Hermano y tío de las víctimas.
6. Manuel Tíu Tojín, Hermano y tío de las víctimas.

---

⁵¹ De conformidad con el artículo 2.15 del Reglamento, el término “familiares” significa “los familiares inmediatos, es decir, ascendientes y descendientes en línea directa, hermanos, cónyuges o compañeros permanentes, o aquellos determinados por la Corte en su Caso”

⁵² Caso Molina Theissen vrs Guatemala Sentencia de reparaciones de 3 de julio de 2004, parr 48

Estas personas son los titulares del derecho de reparación, tanto en su calidad de beneficiarios de las reparaciones como consecuencia de las violaciones cometidas en contra de María y Josefa Tíu pero además como víctimas per se.

INDEMNIZACION PECUNIARIA.

Dentro de esta categoría, la jurisprudencia de la Corte Interamericana incluye la pérdida de ingresos (lucro cesante) y la restitución de los gastos en que han incurrido los familiares a causa de las violaciones (daño emergente)⁵³.

a. Lucro Cesante.

En este sentido la Corte ha desarrollado todo un criterio para la determinación del lucro cesante. Así ha establecido que "debe estarse a las expectativas de vida laboral en el país respectivo y a los ingresos posibles de la víctima; en caso que esto no sea posible de determinar, se ha recurrido a determinarlo sobre la base de los ingresos mínimos establecidos en la legislación interna, ya sea el ingreso general, o bien, aquel correspondiente a las labores que desempeñaba la víctima".⁵⁴

Con base a la jurisprudencia, y para efectos de los cálculos a realizarse en este apartado se han tomado en consideración los aspectos siguientes:

Para el año 1990 fecha de la desaparición de ambas víctimas, la esperanza de vida de una mujer guatemalteca promedio era de 66.8 años, tomando como fuente el Boletín Demográfico 1950-2025, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, Naciones Unidas, quinquenio 1990-1995)

El salario utilizado para realizar el cálculo correspondiente, es en base al salario mínimo actual para trabajadores agrícolas que es de Q1,433.50 por mes, con el tipo de cambio actual de 7.45 = USD 192.42.

Basados en la jurisprudencia establecida por la Corte para estos cálculos, según lo establecido en Caso Villagrán Morales y Otros (Caso de los "Niños de la Calle"). Sentencia

---

⁵³ Caso "Niños de la Calle" (Villagrán Morales y otros) Sentencia de Reparaciones, 26 de mayo de 2001, párr 70

⁵⁴ Caso Castillo Páez - reparaciones, párr 75; Caso Villagrán Morales - reparaciones, párr 81; Caso Trujillo Oroza - reparaciones, párr 73

de reparaciones.⁵⁵, casos Caballero Delgado y Santana, reparaciones Sutra *nota* 223, párr. 196;

Es así como, María Tíu Tojín, quien tenía 27 años y 11 meses al momento de su desaparición, por lo que le hubiera hecho falta por vivir 39 años con 7 meses.

$$27 \text{ años} \times 12 \text{ meses} = 324 \text{ meses} + 7 \text{ meses} = 331 \text{ meses} \times 192.42 = \text{USD } 63,691.02$$

$$\text{USD } 63,691.02 - 25\% (\text{USD } 15,922.75) = \text{USD } \$ 47,768.27$$

En relación a Josefa Tíu Tojín, a quien se le calcula una edad entre uno a tres meses, y quien no tuvo oportunidad de desarrollarse plenamente y establecer su proyecto de vida, realizamos el cálculo basándonos en una edad de 3 meses, por lo que al momento de su desaparición le hubiera hecho falta por vivir 66 años con 5 meses, bajo el supuesto que fuese hasta la edad de dieciocho años en los cuales empezara a generar ingresos.

$$66 \text{ años} \times 12 \text{ meses} = 792 \text{ meses} + 5 = 797 \text{ meses} \times 192.42 = \text{USD } 153,358.74$$

$$\text{USD } 153,358.74 - 25\% (\text{USD } 38,339.68) = \text{USD } 115,019.06$$

Siendo el Total de Lucro Cesante por ambas víctimas de USD 162,787.33 (ciento sesenta y dos mil setecientos ochenta y siete con treinta y tres centavos de dólar)

b. Daño Emergente.

En cuanto al daño emergente, deben ser tomados en cuenta los gastos en que incurrieron los familiares de las víctimas como consecuencia directa de los hechos. Dichos gastos están relacionados con las gestiones tendientes a establecer el paradero de María y Josefa Tíu.

---

⁵⁵ Para estimar el lucro cesante se debe tomar en cuenta la edad de la víctima a la fecha de su muerte ("), los años por vivir con forme a su expectativa vital (. 1, la actividad a la que se dedicaba al momento de los hechos, las mejoras económicas que hubiese podido obtener y su ingreso. En este caso se aplicaría el salario real, o en el caso de que no exista información de los salarios reales de las víctimas, se aplicaría el salario mínimo para actividades no agrícolas en Guatemala ( ) se debe calcular dicho lucro con base en los 12 salarios mensuales de cada año; además se deben considerar los dos meses de salario adicionales por año establecidos en la legislación guatemalteca y los correspondientes intereses

Entre estas gestiones, los familiares señalan su movilización a varios lugares en el país como: Nebaj, Santa Cruz y la ciudad capital, traslados a destacamentos militares, juzgados, llamadas, papelería y fotocopias, durante la búsqueda de ambas víctimas.

Además, el daño emergente debe incluir los gastos y pérdidas a consecuencia de de la depresión y la tristeza, estos provocaron gastos médicos ya que con la desaparición de María y Josefa Tíu, los miembros de la familia sufrieron trastornos físicos psicológicos, por lo que la familia de las víctimas reportan un total de **USD 2,013.42** (dos mil trece dólares con cuarenta y dos centavos)

TOTAL INDEMNIZACION PECUNIARIA: USD 164,800.75 (CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DOLARES CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS)

DAÑO MORAL.

En relación con el daño moral la Corte ha señalado: “que éste es resarcible según el Derecho internacional, y en particular, en los casos de violaciones de derechos humanos. Su liquidación debe ajustarse a los principios de la equidad”.⁵⁶

Por su parte, en la sentencia de reparaciones de los casos Bámaca Velásquez y Trujillo Oroza, la Corte fija como elementos del daño inmaterial: “el daño inmaterial puede comprender tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a las víctimas directas ya sus allegados, el menoscabo de valores muy significativos para las personas, así como las alteraciones de carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia de la víctima o su familia”.

- a. Daño Moral causado a María Tíu Tojín y Josefa Tíu Tojín.

La Corte Interamericana ha señalado que la desaparición forzada de personas implica “con frecuencia la ejecución de los detenidos, en secreto y sin fórmula de juicio, seguida del ocultamiento del cadáver con el objeto de borrar toda huella material del crimen y de

---

⁵⁶ Caso Velásquez Rodríguez – indemnización compensatoria, párr 27

procurar la impunidad de quienes lo cometieron, lo que significa una brutal violación del derecho a la vida, reconocido en el artículo 4 de la Convención”⁵⁷.

Así mismo, el Estado faltó a su deber de brindar protección a Josefa, quien tenía poco tiempo de haber nacido al momento de su captura ilegal, sin tomar en consideración las necesidades primarias de la menor a quien debió resguardarse desde un principio para evitarle cualquier tipo de sufrimiento, así lo indica la Corte Interamericana en la sentencia Molina Theissen: “En el caso sub judice, al fijar la compensación por daño inmaterial, se debe considerar que el Estado tiene, respecto de los niños una obligación especial de protección, la que debió haber cumplido respecto de la víctima por su condición de niño”⁵⁸ Con base en la jurisprudencia de la Corte Interamericana⁵⁹ el monto de indemnización por el profundo sufrimiento moral de María Tíu Tojín y su menor hija, debe ser de US 100,000.00 por cada una de las víctimas, cantidad que debe ser entregada de forma equitativa a los familiares.

b. Daños morales causados a los familiares de María y Josefa Tíu.

Atendiendo al sufrimiento que ocasiona a los familiares de las víctimas, la angustia de la desaparición de sus seres queridos, angustia que se ha prolongado en el tiempo bajo la esperanza de que ambas pudiesen estar con vida, y a la vez el temor de imaginar todo el dolor infringido a ambas por sus captores. La angustia provocada durante todo el proceso de búsqueda, y el temor a la vez durante la presentación de las denuncias relacionadas a estos hechos desde 1990. Además el temor causado a Victoriana Tíu Tojín por las diferentes amenazas recibidas por parte de patrulleros de autodefensa civil, aunado a la falta de investigación por parte de las autoridades nacionales implicando un desgaste físico y psicológico para cada uno de los familiares.

En este sentido la Corte Interamericana ha señalado “En el caso de los familiares inmediatos de la víctima, es razonable concluir que las aflicciones sufridas por ésta se extienden a los miembros más cercanos de la familia, particularmente a aquellos que

⁵⁷ Caso Velásquez Rodríguez Sentencia de 28 de julio de 1988 Serie C No 4, parr 157

⁵⁸ Caso Molina Theissen vrs Guatemala Sentencia de Reparaciones 3 de julio de 2004

⁵⁹ En los casos siguientes, la Corte ha otorgado el monto de USD 100,000 00 por concepto de daño moral a la víctima de una violación del artículo 4 de la Convención Americana, derecho a la vida: Caso Molina Theissen (reparaciones 3 de julio 2004; Caso Juan Humberto Sánchez (reparaciones 7 de junio de 2003; Caso Myrna Mack Chang (sentencia 22 de noviembre de 2003; Caso Las Palmeras, sentencia del 26 de noviembre de 2002; caso Oroza, sentencia del 21 de febrero de 2002; caso Bámaca Velásquez sentencia del 22 de febrero de 2002

tenían un contacto afectivo estrecho con ella. No se requiere prueba para llegar a esta conclusión”⁶⁰

Sumando además la inacción del Estado posterior a la firma del Acuerdo de Solución Amistosa en materia de recuperación de los restos de las víctimas y la investigación de los hechos a pesar de la existencia del marco normativo que así lo permite.

Por los daños morales sufridos por la señora Josefa Tíu Imul, madre y abuela de las víctimas respectivamente, Victoriana Tíu Tojín, Rosa Tíu Tojín, Juana Tíu Tojín, Pedro Tíu Tojín, Manuel Tíu Tojín, Hermanos, hermanas y tíos y tías de las víctimas, se establece un monto total de **USD 25,000.00** para cada uno, sumando un total de **USD 350,000** **Trescientos cincuenta mil dólares por concepto de daño moral.**

La Indemnización Económica asciende a:

USD 512,787.33 quinientos doce mil setecientos ochenta y siete dólares con treinta y tres centavos, se solicita sin embargo a la Honorable Corte, que en base a los antecedentes del caso, a la indemnización económica ya entregada, se analicen los términos de esta propuesta y se establezca, lo más conveniente bajo el principio de equidad.

OTROS FORMAS DE REPARACION.

a. Tratamiento Psicológico.

La Corte ha establecido: “... existe evidencia para determinar que pospadecimientos psicológicos de los familiares de Marco Antonio Molina Theissen, que tuvieron origen tanto en lo sucedido a éste, como en el cuadro de impunidad que persiste en el presente caso, perduran hasta ahora (...)”⁶¹.

En este caso, se solicita, que la Corte determine la prestación de atención psicológica y física a los familiares de María y Josefa por un periodo no menor de tres años, atención que debe ser prestada en Parraxtut, lugar en el cual habitan actualmente los familiares de

⁶⁰ Cfr. Caso Maritza Urrutia, supra nota 2, párr. 169; Caso Myrna Mack Chang, supra nota 2, párr. 264

⁶¹ Caso Molina Theissen, Párr. 71

las víctimas, estableciéndose en conjunto con los beneficiarios y sus representantes el plan de atención que incluyan las visitas a la comunidad y la atención individual y familiar.

b. Ubicación de María y Josefa Tíu y su Devolución a sus Familiares. (Cesación de la violación)

Es de suma importancia que el estado asuma de inmediato el impulso de la Comisión de búsqueda de personas desaparecidas, destinando para el efecto los recursos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento, que permita impulsar todas las acciones necesarias para la ubicación de las personas desaparecidas. La inclusión de este caso en el Plan de Búsqueda, es de vital importancia bajo la posibilidad de que Josefa haya sido dada en adopción. Para el efecto este caso puede incluirse dentro del Plan de Búsqueda de Personas desaparecidas, el cual el Estado debe asumir el compromiso de agilizar los trámites en cuanto al marco normativo, constitución y presupuesto asignado para su funcionamiento inmediato, siendo este un compromiso prioritario del cual debe informar sobre su avance a la Honorable Corte.

Este es un compromiso que el Estado de Guatemala tiene pendiente en relación a las 45,000 víctimas de desaparición durante el conflicto armado interno en Guatemala; en especial es un compromiso con los niños y niñas que pudieran incluso estar aun en poder de sus captores.

Paralelamente, es necesario que se retome coordinación con las instancias que puedan colaborar a efecto de verificar: (a) Si en restos que hasta el momento han sido recuperados se pudiera identificar a María. (b) Que se lleve a cabo la determinación de la existencia de los cementerios clandestinos que se encuentren en los lugares a los que pudieran haber sido trasladadas las víctimas, tomando como punto de referencia el destacamento de Nebaj, ultimo lugar en el que fueron vistas y realizar las exhumaciones correspondientes a efecto de agotar toda posibilidad de ubicación de ambas víctimas. Para el efecto se requiere de la determinación de recursos económicos que permitan que la instancia del Estado encargada de esta actividad o bien alguna organización no gubernamental cuente con los fondos necesarios para llevar a cabo exhumaciones e identificación a través de análisis de ADN.

c. Día Nacional de la Niña y el Niño Víctima del Conflicto Armado Interno.

Que se Decrete el Día Nacional del niño y la niña víctima del conflicto armado interno, mismo que deberá incluir dentro de los considerandos información concreta del por qué de dicho decreto. Este decreto tiene como objeto además de la dignificación especial de la memoria de Josefa Tiu, el impulsar los procesos de Verdad y dar a conocer que la niñez fue fuertemente golpeada durante este periodo que duró 36 años. Al emitirse este Decreto deben llevarse acciones paralelas de divulgación de los principales puntos resolutive de la sentencia, por los diferentes medios de comunicación Radial y Escrita en los idiomas K'iche' y Español.

d. Investigación, Juicio y Sanción de los autores materiales e intelectuales.

"Lo que queremos es que se haga justicia, escuchar que la justicia nos responda (...)"⁶²

La familia de María y Josefa, establecen como una de las consecuencias más importantes de haber tenido la oportunidad de plantear este caso ante el Sistema Interamericano, el impulso de una investigación seria y rigurosa que determine a todos los responsables de la desaparición de ambas víctimas, que tenga como finalidad llevar a juicio y sancionar a dichos responsables.

Para el efecto, es de vital importancia que el Estado de Guatemala establezca un Fiscal Especial que cumpla con la función específica de investigar los hechos relativos al presente caso, con participación de los familiares de las víctimas o sus representantes en cada una de las etapas correspondientes sin que se imponga la necesidad de Querrellarse, ya que como se ha establecido, el querrellarse traería consigo una serie de responsabilidades, en especial económicas a los cuales los familiares de la víctima no podrían tener acceso, si bien en un determinado momento ejecutaran su derecho de querrellarse en el proceso, que este no signifique que la carga probatoria recaiga sobre estos como ha sucedido en otros casos.

Para que este caso pueda avanzar, es necesario que se giren, sin dilación, las instrucciones pertinentes a efecto de que los Tribunales Militares entreguen a la Corte Suprema de

---

⁶² Declaración de Victoriana Tiu Tojin, 30 de abril de 2007, Audiencia Pública Corte Interamericana de Derechos Humanos

Justicia este y cualquier otro expediente que en materia de derechos humanos y delitos comunes haya estado bajo su conocimiento.

Es importante además, que el Estado adopte un compromiso serio en cuanto a la determinación de responsabilidades administrativas y judiciales a las cuales, las personas que sean asignadas a este caso puedan enfrentarse si no se cumple de forma efectiva y eficiente con la investigación de los hechos de este Caso, ya que se considera que existe información suficiente que pueda llevar, a corto plazo, a determinarse los responsables directos de la detención y desaparición de María y Josefa.

Es necesario que el Estado de Guatemala adopte todas las medidas necesarias para evitar que el fuero militar vuelva a conocer este tipo de delitos, mucho menos ampliar la misma a delitos comunes tal y como lo propone la Iniciativa de Ley que lleva por nombre Código Militar, misma que cuenta con registro legislativo No. 2794, presentada el 7 de noviembre de 2002.

GASTOS Y COSTAS.

La Corte ha estimado que las costas forman parte de las reparaciones que se encuentran establecidas en el artículo 63.1 de la Convención. Puesto que derivan naturalmente de la actividad desplegada por la víctima, sus derecho habientes o sus representantes para obtener la resolución jurisdiccional en la que se reconozca la violación cometida y se fijen sus consecuencias jurídicas.⁶³

Ha establecido además que las costas "comprenden los diversos gastos que la víctima hace o se compromete a hacer para acceder al sistema interamericano de protección de los derechos humanos, figurando los honorarios que ha de cubrir, convencionalmente, a quienes le brindan asistencia jurídica."⁶⁴

El Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos se constituyó como peticionario en el presente caso a partir de 1993, realizándose para el efecto investigación sobre el caso y documentación del mismo, así como todo el proceso de litigio y acompañamiento a los familiares de las víctimas. CALDH asesora actualmente un promedio de 19 casos, por lo cual los mismos son acompañados por diferentes abogados nacionales e internacionales

---

⁶³ Caballero Delgado y Santana, párrafo 79

⁶⁴ Idem párr 80

con experiencia en Derechos Humanos, adjunto se presenta información relacionada a los salarios devengados mensualmente por algunos de ellos a efecto de utilizarlos como base para los cálculos correspondientes.

A continuación se enumeran los gastos y costas de representación del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, de los cuales, como puede verificarse con la documentación adjunta (facturas), ninguno de estos han sido cubiertos durante el proceso de Solución Amistosa.

GASTOS Y COSTAS		
I. GASTOS ADMINISTRATIVOS		Total
I a	Honorarios Profesionales: Bajo el principio de equidad se ha realizado un cálculo razonable en cuanto a los honorarios considerando que han sido cuatro los abogados que han participado en el proceso de investigación, documentación y litigio de este caso, quienes devengaban en su momento USD 23.020,13, USD 17.852,35 y dos de ellos USD 15.503,35 anualmente. Para que no resultara una suma excesiva, se ha hecho el cálculo bajo el supuesto que cada uno de ellos ha dedicado por lo menos 2 meses al presente caso desde sus inicios hasta la fecha, siendo el resultado de esa operación el monto a solicitar.	USD 11,979 86
I b	Servicios Notariales, recepción de Peritaje	USD 180 21
I c	Útiles de Oficina y otros Incluye este rubro, materiales de oficina, fotocopias, envío de documentos, etc	USD 213 67
I d	Reuniones con peticionarios Este rubro incluye, gastos de movilización, hospedaje y alimentación de algunas de las reuniones sostenidas con peticionarios	USD 869 74
PARTICIPACION EN AUDIENCIAS		
II a	Audiencia ante Corte Interamericana de Derechos Humanos En este se incluyen, boletos aéreos, gastos de movilización, hospedaje, alimentación y otros trámites relacionados de representantes y peticionarios, respaldados todos por las facturas correspondientes	USD 4,157 69
TOTAL		USD 17,401.17

PETICIONES FINALES:

1. En atención a los Fundamentos de Hecho y Derecho que se han desarrollado hasta ahora y puesto a conocimiento de la Honorable Corte, a través de la documentación que forma parte del acervo probatorio, declaración de Victoriana, hermana y tía de las víctimas respectivamente y los peritajes de los Expertos Helen Mack y Javier Gurriarán, en atención al reconocimiento de responsabilidad de las violaciones alegadas por el Estado de Guatemala, solicitamos que la Honorable Corte en Sentencia establezca:

- a. El Estado guatemalteco es responsable por la violación de los artículos 4 –derecho a la vida-, 5 –derecho a la integridad personal-, 7 –derecho a la libertad personal-, 8 –derecho a las garantías judiciales- y 25 –derecho a la protección judicial- de la Convención Americana, en relación con la obligación general de respeto y garantía de los derechos humanos establecida en el artículo 1 (1) del mismo instrumento; y artículo I de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en perjuicio de María Tíu Tojín y Josefa Tíu Tojín.
- b. Que el Estado guatemalteco es responsable por la violación de los artículos 19 –derechos del niño- de la Convención Americana, en relación con la obligación general contenida en el artículo 1 (1) del mismo tratado, en perjuicio de la niña Josefa Tíu Tojín; y
- c. Que el Estado guatemalteco es responsable por la violación de los artículos 5, 8 y 25 de la Convención Americana, en relación con la obligación general de respeto y garantía de los derechos humanos contenida en el artículo 1 (1) del mismo instrumento, en perjuicio de los familiares de las víctimas.

2. Dado que la sentencia es per se, una forma de reparación, pero a la vez es una herramienta necesaria y de gran valor para el impulso de los procesos que impulsan el respeto, promoción y protección de los derechos humanos, así como el impulso de procesos legales a nivel interno por la jurisprudencia que la misma llega a desarrollar, reiteramos la solicitud de que la Honorable Corte lleve a cabo una Caracterización Amplia de los hechos de los hechos aquí establecidos, en especial sobre los aspectos relacionados a los obstáculos a los que se enfrentan los pueblos indígenas para acceder a la justicia, así

como la determinación de responsabilidades internacionales en las cuales el Estado incurriría al aprobarse legislación que permita reestablecer y ampliar el fuero militar.

3. Que la Corte establezca, en atención a estas violaciones, que el Estado de Guatemala es responsable de la Desaparición Forzada de María Tiu Tojín y Josefa Tíu Tojin, que por su carácter continuo sigue violando los derechos de ambas víctimas, así como el de sus familiares al negarles el acceso a la verdad y a la justicia, lo cual cesará únicamente al momento en que se determine el paradero de ambas y se investigue, juzgue y sancione a los responsables de estos hechos.

4. Que como consecuencia la Corte ordene al Estado que cumpla efectivamente con las formas de Reparación previamente solicitadas, estableciendo para el efecto plazos prudentes.

5. Que en materia de Reparación, la Corte examine los planteamientos sobre reparación económica, y en base al principio de equidad, se pronuncie al respecto determinando lo que en derecho corresponda.

6. Que se condene al Estado al pago de Gastos y Costas correspondientes.